



Estudios/
Investigaciones

Movimientos socioespaciales y socioterritoriales en Argentina

Acciones colectivas y cartografía de la
protesta urbana durante 2021

Fernanda Torres
(Coordinadora)



EDICIONES
DE LA FAHCE

FaHCE
FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

IdIHCS

Instituto de
Investigaciones en
Humanidades y
Ciencias Sociales
CONICET
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Movimientos socioespaciales y socioterritoriales en Argentina

Acciones colectivas y cartografía de la protesta urbana durante 2021

Fernanda Torres
(Coordinadora)



2025

Esta publicación ha sido sometida a evaluación interna y externa organizada por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.

Diseño: Federico Banzato

Diseño de tapa: Sara Guitelman

Imagen de tapa: Jorge Daniel Battista. (2022). El pañuelo (óleo sobre tela)

Editor por Ediciones de la FaHCE: Maximiliano Costagliola

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

©2025 Universidad Nacional de La Plata

ISBN 978-950-34-2635-7

Colección Estudios/Investigaciones, 97

Cita sugerida: Torres, F. (Coord.). (2025). *Movimientos socioespaciales y socioterritoriales en Argentina: Acciones colectivas y cartografía de la protesta urbana durante 2021*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ; IdIHCS. (Estudios/Investigaciones ; 97). <https://doi.org/10.24215/978-950-34-2635-7>

Disponible en <https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/280>



Licencia Creative Commons 4.0 Internacional
(Atribución-No comercial-Compartir igual)

**Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación**

Decana

Ana Julia Ramírez

Vicedecano

Martín Legarralde

Secretario de Asuntos Académicos

Hernán Sorgentini

Secretario de Posgrado

Fabio Espósito

Secretario de Investigación

Marcelo Starcenbaum

Secretario de Extensión Universitaria

Jerónimo Pinedo

Prosecretaria de Publicaciones y Gestión Editorial

Verónica Delgado

**Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales
(IdIHCS-UNLP/CONICET)**

Director

Juan Antonio Ennis

Vicedirectora

Myriam Southwell

Índice

<u>Introducción</u>	<u>7</u>
<u>1. Aspectos teóricos y metodológicos</u>	<u>11</u>
<u>2. Contexto histórico, sociopolítico y territorial urbano de Argentina</u>	<u>31</u>
<u>3. Base de datos. Análisis de resultados</u>	<u>57</u>
<u>4. Resultados, hallazgos e interrogantes.....</u>	<u>85</u>
<u>Referencias bibliográficas.....</u>	<u>89</u>
<u>Quienes escriben</u>	<u>97</u>

Introducción

El objetivo de este libro consiste en presentar los primeros resultados de un proyecto a largo plazo que estamos desarrollando desde el Grupo de estudios sobre Movimientos Socioespaciales y Socio-territoriales Urbanos en Argentina, en el marco de un proyecto de investigación internacional “Movimentos socioterritoriais em perspectiva comparativa” (UNESP/CAPES-PRINT), en el que equipos de diversos países hicieron lo propio en sus espacios urbanos, rurales, bosques y cuerpos de agua.

Nos proponemos comprender las acciones colectivas que llevan a cabo los movimientos sociales en los espacios urbanos de Argentina, poniendo las conclusiones en diálogo con lo que ocurre en distintos países de América Latina y Europa en sus múltiples espacios de militancia y organización.

América Latina y el Caribe son algunas de las regiones del planeta donde la lucha por los territorios es más intensa. Desde hace más de cinco siglos, pueblos indígenas, campesinos, quilombolas, pueblos ribereños y poblaciones urbanas se han venido organizando en movimientos de resistencia contra la expropiación de sus territorios.

En el proyecto de investigación que enmarca el trabajo realizado, se analizan diferentes expresiones de dominación territorial en varios países de estudio, así como también las formas de resistencia que se tejen frente a esa dominación, que buscan cuestionar las diferentes modalidades de extractivismos existentes: los que expropian

los territorios, contaminan agroecosistemas, expulsan poblaciones y destruyen modos de reproducción de la vida. Estas luchas, en ocasiones, emergen como una forma de garantizar la existencia de los pueblos, siendo, por tanto, más que un problema político y económico, un problema civilizatorio, que tiene a los territorios como lugares de existencia. Estudiamos, entonces, las formas en las que los movimientos socioterritoriales se organizan para luchar en defensa de sus territorios, así como los modos en los que los gobiernos, los partidos políticos y las corporaciones responden a las luchas.

Para comprender mejor estos procesos, realizamos una investigación en torno a las acciones colectivas de los movimientos socioespaciales y socioterritoriales desde una perspectiva crítica y comparada. El objetivo de nuestro análisis es exponer el despliegue de estrategias de producción territorial de diferentes grupos sociales y pueblos para conquistar o recuperar sus territorios. A su vez, incorporamos a la discusión las diferencias entre estos movimientos, sus procesos de formación social y sus cosmovisiones, dando cuenta de la amplia diversidad de contextos que configuran la actualidad de los países que están comprometidos en este estudio.

Este escrito se concentra en las acciones que tuvieron lugar en el espacio urbano de Argentina durante el año 2021, y en él se podrá encontrar un primer acercamiento a una amplia base de datos que construimos a partir del relevamiento de noticias publicadas en medios de comunicación; ésta se encuentra publicada en el repositorio institucional de CONICET: <http://hdl.handle.net/11336/257784> (Torres et al., 2025).

De esta forma, en las páginas siguientes se presenta información obtenida a partir de la base construida, así como también algunas conclusiones a las que arribamos a partir del material recopilado. Este corpus ofrece múltiples potencialidades analíticas y comparativas para continuar ampliando.

En primer lugar, presentamos los principales aspectos teóricos y metodológicos de la investigación, haciendo especial énfasis en la forma en que definimos la acción colectiva y los movimientos sociales, así como en la perspectiva espacial adoptada, a partir de la que analizamos la cuestión urbana y los movimientos socioespaciales y socioterritoriales. Además, desarrollamos la metodología implementada en el relevamiento y análisis de los datos.

En segundo lugar, abordamos brevemente algunos aspectos del contexto sociopolítico de la Argentina en la historia reciente. En este marco, profundizamos en torno a la situación de los trabajadores sindicalizados, desocupados y de la economía popular, realizamos también breves caracterizaciones de los procesos de movilización y reclamo en torno a los derechos humanos, los colectivos feministas y LGTTBQ+, los movimientos socioambientales y los relacionados con la vivienda y el hábitat. Repasamos los rasgos centrales del proceso de urbanización en nuestro país, y nos detenemos particularmente en los rasgos emergentes vinculados al advenimiento de la pandemia por Covid-19.

En tercer lugar, desplegamos los datos construidos, detallando el análisis de resultados para las acciones colectivas urbanas de Argentina durante el 2021. En este sentido, presentamos la cartografía realizada a partir de esas acciones, protagonizadas por movimientos socioespaciales y socioterritoriales urbanos. Además, construimos cuadros y gráficos de las principales variables analizadas: tipos de acción, objetivos de la acción, tipos de movimientos, tipos de institución interviniente y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Finalmente, presentamos los resultados de la investigación, destacando los principales hallazgos y los interrogantes que emergieron del proceso de análisis, así como también algunos aspectos sobre los que continuaremos profundizando en futuros trabajos, informes y presentaciones.

1. Aspectos teóricos y metodológicos

En esta sección, desarrollamos brevemente algunas de las perspectivas teóricas y metodológicas que sustentan el proceso de investigación a partir del cual se generó el relevamiento.

Acción colectiva, movimientos sociales y movimientos socioespaciales / socioterritoriales

Una de las grandes áreas, históricas y actuales, de investigación y del saber científico-social es el estudio de los movimientos sociales, la acción colectiva y la protesta social, que tienen múltiples implicaciones e interrelaciones. En esta investigación, entendemos a los movimientos sociales como una organización-fuerza con una identidad colectiva propia, pero con una constitución heterogénea, que busca interpelar el espacio político y que, para ello, lleva a cabo acciones colectivas a través del tiempo. De acuerdo con Melucci (1999), un movimiento social es un sistema de acción que asocia orientaciones y significados plurales. Si bien el término “identidad” no da cuenta de su aspecto dinámico, es un rasgo importante, ya que es necesario cierto grado de identificación con el movimiento, el cual está constituido por una pluralidad de orientaciones, significados, relaciones, actores y formas de acción que se unen y entrelazan de una manera particular.

Partiendo de este punto, nuestro trabajo se dedicó al relevamiento de la unidad de análisis central en relación con los movimientos sociales: la acción colectiva. Ésta es entendida como una

categoría que comprende y rebasa la protesta social (Schuster, 2003), y que engloba varias dimensiones: la solidaridad y la capacidad de los sujetos de reconocerse a sí mismos y entre sí como miembros del mismo sistema; la presencia de conflicto, una disputa con un adversario determinado; y, por último, la ruptura de los límites de un sistema al que los sujetos involucrados se refieren, es decir, la existencia de un conflicto que traspasa las fronteras de la compatibilidad (Melucci, 1999).

Con la categoría *conflicto* se busca reponer la complejidad de los movimientos históricos en pos de conocer las formas de dominación y las resistencias. Para ello, consideramos necesario “contemplar tanto los elementos objetivos como subjetivos en toda situación de conflicto [puesto que] las consecuencias del conflicto social (...) dependerán de la forma en que esta sociedad está estructurada” (Tejerina Montaña, 1991, pp. 60-61). En este sentido, cuando los conflictos *cristalizan* hacen posible analizar su institucionalización, en tanto que “la reivindicación de unos intereses concretos conduce, en la mayoría de los casos, a alguna forma de politización” (ibid., pp. 62). Así, la acción colectiva debe ser comprendida teniendo en cuenta los fines, los medios y el ambiente, factores que se encuentran en constante tensión (Melucci, 1999), entendiendo que, en los movimientos sociales, se combinan diversas orientaciones y múltiples actores, y que implican un sistema de oportunidades-restricciones que va moldeando sus relaciones.

De esta forma, en nuestro trabajo, la categoría movimiento social se operacionalizó a través de las organizaciones sociales protagonistas de las acciones colectivas, asumiendo la identificación con el movimiento a partir de los objetivos manifiestos de la acción y/o de nuestro conocimiento de las organizaciones (por ejemplo, sabemos que la organización Asamblea Permanente por los Derechos Humanos —APDH— pertenece al movimiento por los Derechos Humanos,

que la Asociación de Trabajadores del Estado —ATE— es parte del movimiento sindical, etc.). Por otro lado, los fines de la acción fueron identificados en el relevamiento como los “objetivos de la acción”. Respecto de los medios de la acción, atendiendo a la fuente de la información con la que contamos, pudimos identificar solo los repertorios de la acción bajo la variable “tipo de acción”. Por último, en relación al ambiente, nuestra perspectiva jerarquiza la variable espacial, identificando acciones socioespaciales y socioterritoriales.

Consideramos que es necesaria una articulación que permita integrar conceptos subjetivos y objetivos, agenciales y estructurales, para poder reconstruir la acción colectiva. Particularmente, en las acciones colectivas de protesta social, siguiendo a Schuster (2003), se buscó responder las siguientes preguntas: ¿quién protesta? (identidad del movimiento social o de la protesta social); ¿cuándo y dónde se protesta? (la estructura y las condiciones contextuales de la acción —sociales, económicas, políticas, culturales— y el peso analítico del espacio como elemento productivo y explicativo de la acción, el marco de oportunidades o amenazas de la acción y las condiciones de organización y la movilización de recursos); ¿por qué se protesta? (demanda y objetivos de la acción); y ¿cómo se protesta? (formato de la protesta, la modalidad, las características que adquiere la acción colectiva y las instituciones que intervienen en la acción).

Con el objetivo de responder a estas preguntas, definimos recuperar las acciones llevadas adelante por movimientos sociales que pueden considerarse urbanos. Esto implica dos planteamientos. Por un lado, concebimos al espacio en tanto producto social, a la vez que productor de fenómenos y relaciones sociales. Por otro lado, consideramos que la localización de la acción no es un dato dado, sino que debe ser problematizado. Así, si entendemos que una acción es propia de un movimiento social urbano solo por haber sido realizada en un contexto urbano, esto equivale a considerar al espacio como un

mero escenario o contenedor de acciones y relaciones sociales. Por el contrario, concebir un movimiento y las acciones que éste despliega como urbano, requiere retomar los objetivos de la acción y el espacio disputado. Es por ello que consideramos necesario diferenciar entre acciones realizadas en la ciudad o por/para la ciudad, siendo esta una distinción teórica fundamental que refleja la manera mediante la cual definimos los movimientos sociales desde una mirada espacial, compleja, integral y multidimensional.

Los movimientos sociales urbanos comprenden, entre otras cuestiones, acciones colectivas orientadas a transformar los intereses y valores de una ciudad históricamente determinada. La ciudad, como producto social de intereses y valores en pugna, se transforma tanto por la acción de los intereses dominantes como por la resistencia (Castells, 1986). En tanto puede ser entendida de manera dialéctica, como una relación y como un producto social (Lefebvre, 2013), representa una totalidad compleja y puede ser estudiada desde diferentes dimensiones de las relaciones sociales.

La dimensión espacial es intrínseca a los procesos sociales, por lo que las luchas y movimientos sociales son portadores de —y expresan una— espacialidad, cuyo análisis puede ser importante para la comprensión de este tipo de procesos. Esto explica que podamos hablar de “movimientos socioespaciales”, tal como propuso Mançano Fernandes (2005), dado que todos los movimientos son, en algún sentido, socioespaciales, y el uso de esta categoría es una manera de nombrarlos desde una perspectiva geográfica.

En las últimas décadas, los movimientos sociales en Latinoamérica tienen como una de sus características centrales la lucha por el espacio, el territorio, el ambiente o, en términos más generales, por la generación de un cambio socioespacial, tal como plantea Souza (2011). Así, la espacialidad es un elemento central en las luchas. En lo que sigue, recuperamos algunas discusiones que permiten

problematizar la dimensión espacial de los movimientos y sus múltiples manifestaciones. Distinguimos cuatro aspectos centrales a través de los cuales podemos observar y analizar esa dimensión: la expresión espacial de las acciones, la construcción de agendas vinculadas a problemas del espacio material, los procesos de territorialización y refuncionalización del espacio, la construcción de redes espaciales vinculadas a una política de escala y la construcción de identidades espaciales.

Uno de los primeros aspectos en los que se puede observar la espacialidad de los movimientos es la expresión espacial de sus acciones, considerando su localización, su materialización en el espacio y su manifestación en el paisaje (Tramontani Ramos, 2013). Existen diferentes formas a través de las cuales el movimiento se hace presente en el espacio y en el tiempo, y su presencia define con precisión un punto en el espacio donde su acción encuentra un referente de localización, no solo para sí mismo, sino, sobre todo, para la sociedad en general (dos Santos, 2011). Se trata de sedes, lugares de manifestaciones públicas, sitios donde el movimiento instaura acciones de combate, entre otras, que constituyen maneras de “grafiar” el espacio. Esto incluye los campamentos y asentamientos de los sin tierra, los piquetes o las puebladas de los movimientos de desocupados argentinos, así como también las caminatas, actos públicos, vigilias y manifestaciones. Estas formas de acción colectiva buscan romper los ordenamientos espacio-temporales designados para esos espacios. Esas “grafías” no son ingenuas ni desprovistas de causas, determinaciones, estrategias o racionalidades, por ello, la localización habilita la pregunta: ¿por qué aquí y no en otros lugares? En nuestro relevamiento observamos la localización de las acciones colectivas, atendiendo no solo a la ciudad donde ocurren (que se definió como “referencia espacial”) sino a los sitios específicos dentro de las ciudades, lo cual constituye una puerta de

entrada para ver la dimensión espacial de los movimientos y sus acciones colectivas. Los sitios concretos donde se manifiestan las acciones, pueden o suelen ser sitios que tienen relevancia en relación con el funcionamiento y las dinámicas urbana e intra-urbana (como plazas, avenidas, calles, cruces, rutas, etc.) o bien instituciones que representan al estado (ministerios u otros organismos públicos) o al capital (plantas fabriles, sedes de empresas, una hacienda, etc.) (Sobreiro Filho, 2016).

Otro aspecto significativo es la manera en que el sustrato espacial y sus problemas sintetizan o referencian las demandas o cuestiones, así como la agenda de cada activismo (Tramontani Ramos, 2013). Por ejemplo: acceso o problemas de infraestructura, déficit habitacional, acceso a equipamientos de consumo colectivo, degradación ambiental, entre otros. Si bien no todos los movimientos organizan sus agendas en torno a estas cuestiones, cada vez están más incluidas. Las movilizaciones en torno a problemas vinculados al sustrato espacial y su localización permiten también conocer la geografía de esos problemas, identificando los lugares de mayor manifestación o concentración.

Distintos autores destacan los procesos de territorialización, es decir, la apropiación y control de espacios mediante la presencia física en distintas escalas temporales y espaciales, como una de las estrategias más comunes de los movimientos y sus acciones colectivas y de protesta (ver por ejemplo Souza, 2013; Mançano Fernandes, 2007; Tobío, 2014). En algunos casos esta estrategia ha sido estudiada como un ejercicio de la territorialidad de carácter contencioso, vinculada con la realización de reclamos colectivos y públicos basados en una agenda, programa o conjunto de intereses compartidos (Tobío, 2014). El carácter contencioso está dado por el hecho de que se realiza por canales no institucionales (el corte de ruta, por ejemplo, que es institucionalmente disruptivo), como modo de crear un campo de negociación, generalmente con el Estado. Se trata por ejemplo de la estrategia

típica del movimiento piquetero. Lo que interesa destacar es que el carácter específicamente territorial de la acción —ya sea que se la defina como territorialización o como ejercicio de territorialidad— implica el control de un espacio específico por parte del movimiento o de quien encabeza la acción, con objetivos que incluyen la disputa, la visibilización de demandas y la negociación.

En algunos movimientos, la territorialización es la principal estrategia y, al mismo tiempo, el objetivo y razón de ser del movimiento. Esta particularidad es lo que llevó a plantear la categoría “movimiento socioterritorial” como un tipo de movimiento social cuyo principal objetivo es la apropiación y control de espacios delimitados, es decir, la construcción de verdaderos territorios del movimiento (Mançano Fernandes, 2005). Ese control es una condición necesaria para la materialización de su proyecto político y, a la vez, un medio para la transformación de las relaciones socioespaciales (Halvorsen et al., 2021).

En otros casos, más que procesos de territorialización en sentido estricto, es frecuente el despliegue de estrategias donde se da un relativo control de espacios por parte de un movimiento, lo que ha sido definido como territorialidad no contenciosa (Tobío, 2014). Este concepto alude a las acciones comunitarias que algunos movimientos desarrollan en los barrios, donde construyen legitimidad política y confianza al tiempo que resuelven carencias materiales y van instituyendo una nueva territorialidad. “En dichos territorios, en términos generales, se ponen en juego las formas de ser, de habitar circunstancias y de apropiarse del mundo” (*ibid.*, p. 4). Se trata de espacios donde los movimientos, además, también entran en disputa con otros actores.

En los casos donde los movimientos sociales buscan apropiarse, ya sea de manera directa y explícita, o bien indirecta, de espacios, suelen desplegarse otras prácticas espaciales (Souza, 2013), tales como la refuncionalización o ajuste del sustrato espacial material

a las necesidades que derivan de esas nuevas relaciones sociales. Se trata de una práctica crucial en los casos en los que se busca ejercer el control de espacios de manera duradera. Puede tratarse de la reutilización o de la reconstrucción de espacios de manera creativa, ajustándolos a nuevas funciones. Un ejemplo de ello es la reutilización de ciertas construcciones en un espacio ocupado para fines de vivienda, de servicios comunitarios, entre otros.

La construcción de redes espaciales es otra práctica clave para los movimientos sociales, sean o no “socioterritoriales”. De acuerdo con Souza (2013), la formación de redes espaciales corresponde a la implementación de prácticas multiescalares integrando varias o muchas experiencias de resistencia en distintos lugares, lo que permite que se alcancen sinergias en materia de visibilidad pública de demandas y protestas, de ayuda mutua, de eficiencia logística, entre otras. La activación de esta práctica se vincula con lo que puede definirse como “política de escala”. En esta misma línea, dos Santos (2011) plantea la relación entre acción e interlocutores, y los arreglos escalares que pueden desplegar. Por ejemplo, actores locales que dialogan con actores en otras escalas para fortalecer su lucha local o bien actores que dialogan en otras escalas y que disputan agendas en esas otras escalas. La elección adecuada de los interlocutores en otras escalas, la capacidad de hacerse reconocer por ellos y por otros actores en esas esferas, y la elección de la agenda correcta en esa otra escala, constituyen elementos clave para el escalado y el fortalecimiento de la lucha (*ibid.*). Esto implica la manipulación estratégica de la disociación entre la escala de origen del evento y la escala del impacto, estableciendo un juego escalar donde la articulación de iniciativas localizadas configura una presión que es nacionalizada, aspecto que también observamos en el relevamiento.

Un tema debatido por diversos autores es la construcción de identidades basadas en enunciados o referencias espaciales, es decir,

la formación de identidades y subjetividades colectivas enraizadas en una referencia explícitamente espacial que funda y constituye el propio activismo (Tramontani Ramos, 2013). Los movimientos socioespaciales plantean identidades colectivas que pueden estar ligadas a una política de lugar o informadas por un sentido arraigado de pertenencia al mismo, con el objetivo de lograr un cambio socioespacial. Por otro lado, en los movimientos socioterritoriales dicha identidad se construye o transforma a través del proceso de territorialización, es decir, en la construcción activa de un territorio (un espacio apropiado) donde se materializa el proyecto político que los moviliza (Halvorsen et al., 2021).

Otros autores abordan la conformación de identidades construidas en relación con una territorialidad —formas determinadas de apropiación y uso material y simbólico del espacio— frente al embate con otros actores (Porto Gonçalves, 2001), generalmente, en el caso de comunidades campesinas o indígenas. Existen identidades que se construyen en base a referencias espaciales, determinadas por percepciones compartidas de condiciones materiales de vida, ya sea por carencias (como los “sin tierra” o “sin techo”) o por la posesión de condiciones superiores respecto a otros grupos. Por ejemplo, movimientos de barrio y regionales se constituyen tanto para abordar colectivamente estas carencias como para la defensa de riquezas, ventajas y recursos percibidos como comunes en las “experiencias de los lugares” (dos Santos, 2011). Un ejemplo de este tipo de identidades podría ser aquella que se activa en el caso de vecinos de barrios movilizados en contra de la demolición de casas o la construcción de edificios, donde se apela a la amenaza de la “identidad barrial” en torno a las “casas bajas” y la presencia de construcciones reconocidas como parte del patrimonio histórico del barrio. A su vez, otras identidades se tejen en base a problemas o efectos derivados de la expansión de ciertas actividades, tales

como el caso del movimiento de los afectados por las represas en Brasil (Porto Gonçalves, 2016) o el movimiento Paren de fumigar-nos en la Argentina.

El relevamiento realizado estuvo orientado a cuantificar y sistematizar las acciones colectivas de los movimientos urbanos, identificando aquellas que pueden definirse como socioespaciales y socio-territoriales. Así, diferenciamos las acciones socioespaciales como las que expresan una dimensión espacial en algún sentido, ya sea en cuanto al tipo de acción concreta que implica una manifestación en espacio público, un desplazamiento que altera los usos y sentidos habituales del espacio, o bien un reclamo o agenda donde la dimensión espacial adquiere una importancia central.

A su vez, reservamos el término de acción socioterritorial para aquellos casos donde la dimensión espacial se manifiesta de manera más directa y evidente a través de la ocupación y control de espacios concretos, independientemente de la duración de la acción. Por ejemplo, podría considerarse una acción socioterritorial la ocupación prolongada de un terreno para la construcción de viviendas, o bien la ocupación de un espacio con fines de protesta y visibilización durante una jornada.

Asimismo, las acciones colectivas fueron analizadas teniendo en cuenta un conjunto de variables, algunas de las cuales pueden ser puertas de entrada para analizar la dimensión espacial. Además del tipo de acción, relevamos la localización de la acción. En principio, se registraron, en la variable “referencia espacial”, localidades o provincias en los casos en que la noticia no especificaba un lugar exacto. Esto proporcionó una primera cartografía de los conflictos y las sedes de las acciones de los movimientos. En una segunda instancia, y en la medida en que la información estaba disponible, fue posible identificar sitios concretos en los que se desarrollaron las acciones, permitiendo realizar una lectura significativa respecto de

las geografías de los movimientos, como sedes, lugares elegidos para las protestas o bases de acción cotidiana.

Paralelamente, los objetivos de la acción también pueden servir como indicadores de los temas que movilizan a los movimientos, permitiendo distinguir entre aquellos cuyas agendas se centran en cuestiones espaciales. Esto puede abarcar desde problemas vinculados con el entorno físico —como el acceso a la vivienda, la segregación espacial o las afectaciones ambientales— hasta la defensa de ciertos espacios o la resistencia frente a amenazas de desplazamiento, entre otros. De esta manera, los objetivos de las acciones colectivas pueden ser indicadores de las identidades que se construyen asociadas a esas referencias espaciales, así como también de los procesos socioespaciales frente a los cuales se movilizan.

Metodología

Las decisiones metodológicas tomadas desde el inicio y a lo largo de todo el proceso de investigación estuvieron intrínsecamente relacionadas con las conceptualizaciones teóricas mencionadas previamente. Si bien algunas de estas decisiones ya se han ido explicitando, el objetivo de este apartado consiste en sistematizar aquellas más relevantes, dejando en evidencia posibles sesgos o límites que también deben tenerse en cuenta a la hora de analizar los resultados.

En primer lugar, recuperamos el objetivo primario de nuestro grupo de trabajo: construir una base de datos a partir del rastreo y relevamiento de las acciones colectivas urbanas (socioterritoriales y socioespaciales) llevadas a cabo por organizaciones sociales pertenecientes a diferentes movimientos sociales en Argentina, durante el año 2021. Dicho relevamiento se hizo en base a fuentes documentales, cuyo uso en el campo de las Ciencias Sociales ha sido ampliamente discutido.¹

¹ Para una revisión sobre este tema puede consultarse, entre otros, a Iturralde et al. (2023) y Muzzopappa y Villalta (2011).

Específicamente, la unidad de observación que utilizamos para identificar las acciones fueron las noticias publicadas en la web. Considerando la importancia que revisten los contextos de producción, clasificación, conservación, circulación y acceso a documentos digitales, el trabajo con este tipo de fuentes documentales implica el uso de recursos digitales que tienen un *gatekeeper* privado y, al no ser gratuito, este acceso a la información profundiza las desigualdades científicas (Parra Saiani, 2016). Esto sucedió, por ejemplo, con algunos medios que exigían el pago de una membresía para mostrar la noticia completa, requisito que pudo ser salvado, en algunos casos, mediante la lectura de la noticia a través de una ventana de incógnito en el navegador web. En este sentido, entendemos que interpretar esta cuestión requiere problematizar los alcances del “giro digital” en relación al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y a sus transformaciones durante el siglo XXI (Milligan, 2020; Gualda, 2022).

De acuerdo con Río (2008, p. 80) el uso extendido de fuentes periodísticas para el relevamiento de acciones colectivas se debe a que “representa con frecuencia el único recurso realista para recopilar y analizar series amplias de eventos dispersos en el tiempo y en el espacio”. Además, este tipo de fuentes incorporan información fiable en relación con lugares, fechas, factores que precipitaron la acción, su carácter espontáneo o planificado, entre otros datos, que son “circunstancias contempladas de manera rutinaria en la cobertura que hacen los periodistas y sus diarios de las protestas sociales” (*ibid.*). En nuestro relevamiento se consideraron periódicos de tirada nacional (tales como Clarín, La Nación, Página 12) como así también periódicos locales y agencias de noticias diversas. Los posibles sesgos asociados al uso de fuentes periodísticas (tales como la infra o sobre representación de ciertos datos, la cobertura mayor o menor de eventos locales, entre otros) fueron minimizados con la

triangulación de diversas fuentes. Es por eso que se incluyeron en el relevamiento noticias publicadas en otros ámbitos, tales como portales, foros o páginas web de organizaciones sociales o partidos políticos.

La selección y el rastreo de las noticias se realizó día por día durante todo el año 2021 empleando motores de búsqueda de Google, mediante la selección de un conjunto de alertas definidas por palabras clave. Utilizamos cincuenta y cinco alertas relacionadas a algún aspecto del material a buscar, incluyendo los nombres de organizaciones sociales ya conocidas por su actividad de disputa en el espacio urbano, movimientos que tienen un alcance nacional o sectorial conocido, y conceptos clave vinculados a acciones colectivas urbanas. Las principales alertas fueron: “población urbana”, “activismo LGBT”, “agricultura urbana”, “agroecología urbana”, “asamblea popular plaza Dorrego”, “asambleas barriales”, “autoconstrucción”, “conflictos de vivienda”, “cooperativa”, “cooperativas de vivienda”, “cooperativismo”, “CTD-Aníbal Verón”, “CTEP”, “Derecho a la Ciudad”, “Derecho a la vivienda”, “desalojo”, “desarrolladores urbanos”, “espacio común”, “espacio público”, “especulación inmobiliaria”, “Federación Nacional de Trabajadores Precarizados Cooperativistas y de la Economía social CTA”, “Federación Tierra y Vivienda”, “Federación Universitaria Argentina”, “Frente de Organizaciones en Lucha FOL”, “Frente Popular Dario Santillan”, “Garganta Poderosa”, “Habitar Argentina”, “homeless”, “La Poderosa”, “movimiento de derechos humanos”, “movimiento de mujeres”, “Movimiento de Ocupantes e Inquilinos MOI”, “Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)”, “movimiento estudiantil”, “movimiento feminista”, “movimiento LGBT”, “movimiento sindical”, “movimiento social urbano”, “Movimiento Socialista Emerciano”, “Movimiento Territorial Liberación”, “Movimiento Tierra y Libertad”, “movimiento villa-ro”, “movimientos sociales urbanos”, “okupa”, “Organización Barrial Tupac Amaru”, “organizaciones barriales”, “organizaciones cultu-

rales”, “orgullo LGBT”, “personas en situación de calle”, “población LGBT”, “producción social del hábitat”, “UTEP” y “villa miseria”. El objetivo a la hora de construir estas alertas fue lograr un rastreo de las noticias relevantes, que reportaban a través de e-mails en nuestra bandeja de entrada de correo electrónico todos los sitios web que las mencionaran, pero eso no nos exime de que algunas no hayan llegado al correo debido a la ausencia de estas palabras clave o bien por algún error ortográfico en la noticia que impida activar la alerta.

Este primer paso nos proporcionó un cuerpo de 5628 e-mails que contenían noticias relacionadas con los tópicos de las alertas por palabra clave, las cuales luego evaluamos y filtramos de acuerdo al siguiente criterio: seleccionamos únicamente aquellas en las que era posible identificar *una acción colectiva* y que, a su vez, haya sido protagonizada por al menos *una organización social*. Este criterio de selección es una de las decisiones metodológicas más relevantes, ya que implicó descartar noticias en las que no hubiera referencias claras a una acción colectiva y una organización social, ya sea con su nombre o alguna imagen ilustrativa.² Es importante señalar que esto puede deberse a la redacción de la noticia y no necesariamente a la ausencia de organizaciones en la acción, lo que constituye un sesgo derivado del tipo de fuentes de información utilizadas. Un ejemplo frecuente fue encontrarnos con noticias que hacían referencia a “grupos de vecinos” que llevaban a cabo cierta acción colectiva, caso que no cumplía con el criterio de identidad empleado en la investigación.

² Si bien la cuestión identitaria de una organización o movimiento social no se restringe a la existencia de un nombre definido, a la hora de establecer un criterio que operacionalice esa dimensión, consideraremos que en principio su existencia expresa una objetivación subjetivada, un proceso de autopercepción y de presentación pública de un colectivo, generalmente relacionada con los objetivos que le dan origen. Además, le da otra entidad a la acción colectiva, dado que da cuenta de un proceso organizativo previo.

Continuando con el proceso de relevamiento, las 1389 noticias filtradas fueron guardadas en formato PDF, se les asignó un código y se almacenaron. En un segundo momento, procedimos a desagregar la información de las noticias filtradas en diversas variables registradas en un formulario web alojado en la plataforma JotForm, lo cual nos permitió conformar una matriz de datos³.

Nos interesa destacar que, tal como ya expresamos, dos de las variables elegidas para desagregar las noticias están relacionadas con la ubicación geográfica de la acción. Estas variables son la “Referencia espacial”, que especifica la localidad y la “Localización de la acción”, que indica el espacio físico específico donde ocurre la acción. Tal como se mencionó en apartados anteriores, esta combinación nos permite analizar tanto la distribución territorial nacional de las acciones como las decisiones estratégicas de las organizaciones sobre los lugares donde llevan a cabo su actividad. Ejemplos frecuentes incluyen edificios públicos, calles y puntos céntricos de las localidades. Vale aclarar que hemos incluido una categoría específica llamada “Virtual-Nacional” para aquellas acciones que no están vinculadas a un lugar específico o que no son mapeables, que tienen lugar en la virtualidad o que se realizan a escala nacional. Estas son un rasgo distintivo del impacto de la pandemia de Covid-19 en la acción colectiva, ya que las restricciones a la circulación de personas obligaron a incorporar mediaciones virtuales. Pero, además, las

³ El instrumento de relevamiento recuperaba la información consignada en las noticias atendiendo a: el código con el que fue archivado el PDF de la noticia; el título de la noticia; la fuente de la noticia; la fecha de la noticia; el código de referencia espacial; el lugar de localización de la acción; el tipo de acción; la descripción del tipo de acción; el objetivo de la acción; la fecha de la acción inicial y la fecha de la acción final; el tipo de movimiento; el nombre del movimiento; el número de personas protagonistas; el número de familias, si fuese indicado; el tipo de institución interviniente; el nombre de la institución interviniente; el vínculo de la acción con los ODS; la descripción del ODS 18 cuando fuese necesario; y por último, observaciones. También se cargaba el nombre del responsable del registro y su correo electrónico.

acciones virtuales fueron un recurso empleado para instalar demandas a escala nacional y difundir campañas a través de las redes sociales, empleando consignas con # para instalar trending topics en jornadas de protesta, entre otras propuestas.

Por otro lado, se identificaron detalles sobre la metodología de la acción, incluyendo si se trata de una movilización, protesta, evento, reunión o actividad comercial, si es un anuncio en un medio, entre otros tipos. También se relevó el objetivo de la acción, como por ejemplo la reproducción social, la promoción de la igualdad de género, metas laborales, educativas, entre otros. Finalmente, se detallan las fechas en las que tiene lugar la acción, tanto de inicio como de finalización, distinguiéndolas de la fecha de publicación de la noticia.

Con respecto al movimiento que protagoniza las acciones, categorizamos el tipo de movimiento (a partir de observar por ejemplo el objetivo de la acción o la historia de la organización) empleando 16 categorías estandarizadas agrupadas por temas o problemáticas. Las categorías empleadas fueron: movimientos de agricultores periurbanos o urbanos; movimientos ambientalistas; movimientos barriales; movimientos de pueblos originarios; movimientos culturales; movimientos de DDHH; movimientos de economía social y solidaria; movimientos estudiantiles; movimientos de mujeres/feministas; movimientos LGTTBIQ+; movimientos juveniles; movimientos por la inclusión social; movimientos sindicales; movimientos de trabajadores desocupados; movimientos de vivienda y hábitat; y, no indica. Además, registramos el nombre de la organización protagonista.

También incluimos el tipo y nombre de cualquier institución interviniente o participante en la acción desarrollada por las organizaciones o movimientos, como por ejemplo empresas, el Estado (en sus diferentes niveles), iglesias, partidos políticos, organismos internacionales, entre otros.

Por último, también identificamos el vínculo de la acción con alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sumando a su vez una categoría emergente de un “ODS 18” para considerar aquellos casos en los cuales la noticia mencionaba acciones que no adscriben a ninguno de los 17 ODS establecidos, para elaborar posteriormente una clasificación de las mismas. Dentro de ese ODS 18 se han incluido objetivos por la contención social de las personas en situación de calle, contra la violencia institucional y la persecución política, por los derechos de la comunidad LGBTTQ+, entre otros.

Para concluir este apartado, es importante aclarar que las categorías de respuestas posibles en cada variable del formulario fueron ajustadas y mejoradas durante el proceso, adaptándolas a las características más frecuentes encontradas durante la carga. Este ajuste permitió mejorar el instrumento de relevamiento y facilitar el proceso de la carga al incorporar opciones de respuesta estandarizada en lugar del formato de respuesta abierta inicial.

Específicamente, luego de los primeros tres meses de relevamiento, el instrumento fue modificado, incorporando categorías estandarizadas de respuesta. De esta manera, el formulario de carga cambió significativamente. En primer lugar, cargamos datos de la noticia (el código de la noticia, el nombre, apellido y correo electrónico de la persona responsable de la carga de esa noticia, el título, fuente y la fecha en la que fue publicada). A continuación, completamos la ubicación de la acción, consignando la referencia espacial a partir de seleccionar la localidad, el lugar de localización de la acción, la escala de la acción (sea esta nacional, regional, provincial o municipal) y, la fecha de la acción, consignando el inicio y el fin de la misma. Para registrar los objetivos de la acción fueron incorporadas trece opciones de respuesta (entre objetivos por la reproducción social, por la vivienda y el hábitat, de reconocimiento, por el espacio público y patrimonial, de género, por la comunidad

LGBTIQ+, sanitarios, educativos, laborales, religiosos, socioambientales, de derechos humanos, políticos, o que no indican objetivos), permitiendo la selección de múltiples opciones de respuesta, lo que significa que las categorías no son mutuamente excluyentes. De este modo, una acción puede tener un objetivo laboral y, a la vez, objetivos por la reproducción social; así como una organización puede ser parte del movimiento de vivienda y hábitat y, a la vez, del movimiento de mujeres. El análisis de estas intersecciones es uno de los tantos enfoques posibles a desplegar a partir de la base de datos construida. Respecto a los datos del tipo de movimiento, se mantuvo la opción de respuesta estandarizada con las 16 tipologías mencionadas previamente, a la vez que avanzamos en estandarizar una lista con los datos identificados en los tres primeros meses para el nombre del movimiento, dejando la opción otros para incorporar nombres no consignados. Además, se continuó registrando la cantidad de personas involucradas en la acción y el nombre de las instituciones intervenientes, permitiendo seleccionar opciones múltiples (empresa, Estado, iglesia, ONG, partido político, Universidades nacionales, policía, organismos internacionales, otras —consignar cuál— o no informa). Finalmente, se mantuvo el registro del vínculo entre las acciones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (con un ODS 18 para los objetivos emergentes). Esto responde a dos cuestiones. Por un lado, la posibilidad de identificar demandas y patrones de desarrollo presentes en las agendas de los movimientos y dirigidas al Estado a partir de la discusión y legitimación de los ODS y las metas 2030 fijadas por organismos internacionales. Y, por otro lado, identificar las ausencias de esta agenda y las contrapropuestas formuladas por los movimientos para una agenda de desarrollo sostenible, lo que hemos identificado como objetivos emergentes dentro del ODS 18.

En síntesis, consideramos que la información condensada en la base de datos a la que arribamos presenta una enorme potencialidad

para el estudio de los movimientos sociales y la conflictividad urbana en Argentina durante el año 2021, principalmente para dilucidar tendencias, preeminencias y relaciones frecuentes entre los tipos de acción, sus objetivos, sus localizaciones y sus protagonistas. Sin embargo, es preciso reconocer que, para una comprensión compleja de este comportamiento, tanto como para analizar de manera profunda el rol de la espacialidad en las acciones, se necesita ahondar en investigaciones cualitativas que recuperen de manera directa las voces de los actores en juego. El producto de nuestra investigación provee un panorama o diagnóstico general que sirve de punto de partida para dichos abordajes posteriores.

2. Contexto histórico, sociopolítico y territorial urbano de Argentina

En esta sección, desarrollamos brevemente algunos de antecedentes históricos, sociopolíticos y territoriales para aproximarnos a analizar los resultados del relevamiento en el marco de la historia reciente Argentina, prestando especial atención a los vínculos entre economía y sociedad, así como entre sociedad civil y Estado.

Caracterización sociopolítica de la Argentina

Algunos autores han destacado que Argentina es un país cuya incorporación originaria al mercado mundial fue diferente a otros casos latinoamericanos y que esta diferencia originaria ha seguido influyendo sobre algunas características del capitalismo argentino, su estructura de clases, así como en los recursos de poder, las alianzas políticas y la construcción de sujetos políticos colectivos (O'Donnell, 1997). Argentina se vinculó directamente al mercado mundial como exportadora de materias primas, lo que generó una temprana burguesía agraria local. Esta acumulación impuso la emergencia de un sector urbano, comercial e incipientemente industrial comparativamente rico y diversificado. Durante las primeras décadas del siglo XX, el sector popular alcanzó un nivel de ingreso más significativo que en el resto de América Latina, este fenómeno se profundizó con la emergencia de una temprana clase obrera, que recibiría otro impulso importante durante el periodo de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).

No es el objeto de este trabajo desarrollar una caracterización histórica profunda, pero sí destacar algunos datos que sirven de antecedentes importantes para el análisis de la movilización social, la acción colectiva y la conflictividad actual. En este sentido, durante el siglo XX, Argentina se configuró como un país con una homogeneidad intranacional más alta que otros países de la región y la clase obrera tuvo, desde sus inicios, patrones organizativos autónomos frente al Estado y la incipiente burguesía industrial. Asimismo, debemos señalar que la construcción de relaciones de poder en dicha época estableció la centralidad económica de la burguesía pampeana y sus influencias urbanas, construyendo también su centralidad política.

Con la democratización, se consolidó la participación ciudadana a través de la movilización (Romero, 2001), estableciendo una cultura política ligada a la movilización callejera y la ocupación de espacios públicos para expresar desacuerdos y demandas de diversos tipos. Aunque la participación popular fue en varias ocasiones contrarrestada por la imposición de control estatal, incluyendo golpes de Estado que instauraron dictaduras cívico militares —también empresariales y eclesiásticas—, en los años 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976, las vías político-partidarias y sindicales eran consideradas los canales legítimos de expresión para las diversas demandas sociales.

En este sentido, nos interesa destacar la articulación del mercado laboral y de las instituciones político-representativas. Particularmente, notamos la trascendencia que adquirió el proceso de institucionalización social desde la política, a través de canales quasi corporativos entrelazados con organizaciones públicas, asociaciones profesionales y sindicatos. Al mismo tiempo, la importancia del mercado laboral, que ha sido un escenario activo en donde se posicionan nuevos grupos sociales, y ha permitido el acceso a gran parte de las políticas sociales estatales, aspecto sintetizado con la idea de

“ciudadanía industrial” (Torre, 1989) y la de “ciudadanía socio-laboral” (Delamata, 2002) dentro del llamado por Gino Germani régimen nacional popular.

No obstante, durante el último golpe de Estado se implementó un terrorismo de Estado caracterizado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, donde se asesinaron y desaparecieron dirigentes y militantes de diversos sectores (sindicales, estudiantiles, religiosos, culturales, etc.). La política sistemática del terror y el miedo logró desarticular las bases organizativas de los sectores sociales altamente movilizados (fundamental, pero no únicamente, las bases sindicales). Paralelamente, se llevó adelante una reconfiguración económica signada por la desindustrialización, la desregulación estatal y el crecimiento de la actividad financiera en un contexto de fuerte liberalización, lo cual provocó el retroceso de la participación de los sectores populares en el ingreso nacional.

Si bien desde la recuperación democrática de 1983 asistimos a un continuo proceso de transformación en las formas de protesta y en los sujetos protagonistas de la acción colectiva, se desmantelaron las bases del modelo nacional-popular. Desmantelamiento exacerbado por la crisis de la deuda externa (acrecentada como nunca antes durante la última dictadura militar) y una inflación en alza que culminó hacia fines de los ochenta en un contexto de hiperinflación y de creciente pauperización de la sociedad (Svampa, 2005). Los gobiernos neoliberales de Carlos Menem durante la década de 1990 profundizaron el proceso de desmantelamiento del modelo nacional-popular mediante un programa drástico de reformas estructurales. La privatización de empresas públicas, la apertura de las economías nacionales a la competencia externa, la liberación de los mercados financieros y el cumplimiento de los lineamientos de política trazados por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales aparecieron como metas aceptadas por

partidos políticos y líderes de opinión que, décadas atrás, habían contribuido a construir coaliciones intervencionistas, redistribucionistas y desarrollistas.

El estrangulamiento de la estructura productiva que supuso esta “revolución neoliberal” (Acuña, 1993; Acuña y Smith, 1996) dejó amplios sectores de población sin la posibilidad de insertarse o reinserirse laboralmente en el cada vez más desnutrido mercado laboral, en un contexto donde, correlativamente, se profundizó la precarización de las condiciones laborales. Esto dio paso a un proceso de segmentación en el mercado de trabajo basado en el crecimiento del desempleo, la subocupación y en una migración significativa de población de los sectores asalariados a los sectores cuentapropistas e informales de la economía.

El “experimento neoliberal” llevado a cabo en Argentina propició el nacimiento de una nueva estructura social en el país, caracterizada por un alto grado de segmentación, dualización y fragmentación social, así como por un acelerado proceso de empobrecimiento y precarización laboral que afectó a amplias franjas de la población, incluidas las capas medias (Borón, 1995). Este conjunto de transformaciones, y sus consecuencias, culminó en la crisis económica, social y política de diciembre de 2001.

La emergencia del kirchnerismo como nueva fuerza política que llega al gobierno en el año 2003, estuvo acompañada por un sostenido crecimiento de índices macroeconómicos, con una tasa promedio anual acumulativa del 8,5%, entre 2003 y 2007, en contraste con el período anterior, cuando el crecimiento anual fue de 3,4% (CENDA, 2010). Diversas medidas, entre las que puede mencionarse un aumento de la inversión en obras públicas apoyaron un proceso de nuevas transformaciones, sintetizadas bajo el término neodesarrollismo (Katz, 2015), que se define como la aplicación de un modelo históricamente posible basado en la comprensión de una nueva

situación social, combinando la activación de políticas públicas y concesiones a los sectores populares. Además, se produjo una mejora relativa de indicadores como la desocupación, que según datos del INDEC pasó de 21,5% en mayo de 2002, a 8,4% en el primer trimestre de 2008, alcanzando el 7,4% en el primer trimestre de 2010.

Sin embargo, mientras los índices oficiales refieren una reducción de la brecha que separa ricos y pobres, tanto consultores privados como investigaciones académicas (Svampa, 2006; Lozano y Raffo, 2011) señalan la persistencia de índices de desigualdad. En este sentido, después de 2005, las estadísticas y mediciones del INDEC mostraron que la brecha entre los más ricos y los más pobres se hizo mayor, rozando su máximo histórico: el 10% más rico de la población tenía un ingreso 31 veces superior al 10% más pobre. Esto significa que el impacto redistributivo del crecimiento fue relativamente marginal (Borón, 2011). Si bien el índice de Gini, que mide la desigualdad, pasó de un valor equivalente a 0.53 en el 2003 a 0.39 en el 2011, en él no se incluye al 33.7 por ciento de la población trabajadora que no se encuentra registrada, los y las trabajadore/as “en negro”. Si se los considerara, el valor del índice aumentaría, especialmente, teniendo en cuenta la muy lenta evolución del salario real que, en esos 10 años, apenas mejoró un diez por ciento. Por otro lado, el índice de polarización económica⁴ descendió de 47 a 1 (durante el estallido de la Convertibilidad), a 25 a 1; sin embargo, en comparación con el índice de 13 a 1 de 1983, muestra que Argentina era un país más injusto (*ibid.*).

⁴ El Índice de Polarización Económica (IPE) es una medida estadística que evalúa la distribución de la riqueza o ingresos en una población o economía. Mide el grado de concentración de la riqueza entre los más ricos y la pobreza entre los más pobres, es decir, la brecha entre ricos y pobres. El IPE se calcula utilizando fórmulas matemáticas que consideran la distribución de los ingresos o la riqueza en diferentes segmentos de la población.

Tras los gobiernos kirchneristas sobrevino otro retroceso durante el período de 2015 a 2019, con las políticas de derecha implementadas por Mauricio Macri, caracterizadas por la retracción del Estado en la atención y protección de los intereses de los sectores vulnerados, además del endeudamiento externo con el FMI. En ese contexto de desarticulación creciente de políticas estatales, luego de las elecciones de 2019, Alberto Fernández asumió el gobierno con una sociedad castigada por la pobreza, la precarización laboral y el retroceso en la conquista de derechos. Sin embargo, también emergieron y se consolidaron colectivos y organizaciones sociales nucleadas alrededor de problemáticas diversas. Algunas de ellas venían de protagonizar años de intensa movilización, destacándose el movimiento feminista como un referente clave en los procesos de disputa y conflictividad social.

A continuación reseñamos brevemente algunos rasgos de estos sectores de la sociedad, movilizados por diversas demandas y proyectos políticos que consideramos valioso jerarquizar. Cabe aclarar que explicitamos solo algunos de ellos, los que han resultado ser mayormente protagonistas de las acciones colectivas relevadas.

Breve caracterización de los movimientos sociales protagonistas durante 2021

En primer lugar, dentro de la tradición del movimiento obrero argentino observamos que el sujeto trabajador no surge de un proceso similar al experimentado por la masa proletaria europea, sino que nace de los sectores populares, que se han vuelto crecientemente heterogéneos debido a las políticas económicas de los últimos modelos de gobierno. Esto ha resultado en la aparición de distintas formas organizativas que han generado no uno, sino varios “movimientos obreros” (Abal Medina et al., 2017). El mundo del trabajo mutó desde la tradicional sociedad salarial fordista, caracterizada por el pleno empleo, hacia la existencia de sectores desocupados e

informales como resultado de la emergencia en los años 90 de modalidades más “flexibles” de contratación y la subutilización de la mano de obra, que perduraron durante las décadas siguientes. Estos cambios, junto a los índices de alto desempleo, desintegraron el sentido del “trabajo” como la principal forma de inclusión social. Como mencionamos, el período neoliberal y la crisis del mercado de trabajo dejaron un gran saldo de población desocupada, así como un crecimiento del trabajo informal, configurando un nuevo sujeto: el “trabajador desocupado”, organizado bajo la figura de “piquetero”. Ante la creciente pauperización de sus condiciones de vida, estos grupos recurrieron a un repertorio de acción colectiva que interpela al Estado, demandando trabajo e intervención a través de políticas sociales (Maldovan Bonelli et al., 2017).

Dos agrupaciones sindicales emergieron en resistencia al paradigma neoliberal y en defensa del movimiento obrero en Argentina: la rama de la CGT histórica, liderada por el sindicalista Hugo Moyano (CGT “moyanista”) y la CTA (sindicato que surge en disidencia con la CGT oficialista, entre 1991 y 1992). A su vez, en 2011, la CTA se dividió en relación a sus posiciones políticas frente al gobierno kirchnerista, dando lugar a la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T). Entre estas vertientes sindicales, la CTA ha incorporado en sus filas a aquellos trabajadores desocupados o cuyas labores no están comprendidas dentro del empleo formal, como trabajos informales o cuentapropismo.

Si bien con el kirchnerismo se reposicionaron los sindicatos como actores clave en la organización y en la negociación salarial, reabriendo las paritarias y ampliando los convenios colectivos de trabajo en un proceso de “revitalización sindical” (Natalucci, 2017), continuaba existiendo un importante sector de trabajadores informales. Este “otro” movimiento obrero, encontraría

su respaldo organizacional en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), organización social y sindical de Argentina que nace en el 2011 con el objetivo de visibilizar y representar a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, entendida como el conjunto de actividades laborales y productivas que no se encuentran plenamente integradas a la economía formal. Para la CTEP (a partir de 2019 llamada UTEP), la economía popular comprende a “los cartoneros, campesinos, artesanos, vendedores ambulantes, feriantes, trabajadores de programas sociales, motoqueros, cooperativistas, costureros, trabajadores domésticos y de cuidado, microemprendedores y obreros de empresas recuperadas”. Este conjunto da cuenta de la enorme heterogeneidad de labores existentes. Para canalizar estas demandas, la CTEP se organizó copiando el esquema gremial de “ramas” y “secretarías”, promoviendo la defensa de la “democracia sindical” que se expresa en la elección directa de quiénes ocupan funciones dentro de dicha estructura. Sin embargo, surgió cierta tensión entre la organización sindical y la dinámica territorial impulsada por los movimientos que conforman la UTEP.

La forma que adopta esta lucha al momento de interpelar a su interlocutor adquiere algunas características específicas: dado que no puede apelar a la forma tradicional de protesta —la huelga— debe recurrir a otras modalidades tales como la movilización y, en última instancia, el piquete. Estas formas de protesta no son espontáneas ni desorganizadas, sino que se planifican en el marco de una estrategia que implica una comunicación clara de la demanda, una duración (en lo posible) corta del conflicto y facilitar canales de diálogo fluidos con el interlocutor en pos de lograr entendimientos y negociaciones. Entonces, actualmente existen tres principales estructuras gremiales que representan a ese gran universo de trabajadores: la CGT, la CTA y la CTEP/UTEP.

Por otra parte, una mención obligada corresponde al movimiento por los derechos humanos que buscó dar respuesta a las violaciones ocurridas durante la última dictadura militar, articulando un espacio de participación en oposición al gobierno militar y apelando a un sistema de valores fundamentales: la vida, la verdad, la justicia (Sonderéguer, 1985). Inicialmente, estuvo conformado por ocho organismos y se presentaba como un colectivo “heterogéneo cuyos actores se acercan desde distintos orígenes y con diversas identidades” (Jelin, 1985, p. 23). Por un lado, están aquellos fundados en base a un vínculo sanguíneo con las víctimas del terror estatal desatado a mediados de los años 70 en Argentina: Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. Todos ellos son conocidos como organismos de “afectados directos”. Durante la década de 1990, surgió la agrupación HIJOS, que reunió a hijos e hijas de personas detenidas-desaparecidas, y, más recientemente, la agrupación NIETES.

Por otro lado, otro grupo de organismos suelen incluir a familiares de las víctimas, pero no se nombran a partir de ese vínculo, sino en su mayoría a partir de valores universales: Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH, recientemente renombrada como Liga Argentina por los Derechos Humanos), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Movimiento por los Derechos Humanos (MEDH), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Estos organismos suelen ser llamados por la literatura especializada como “no afectados” (Veiga, 1985; González Bombal y Sondéreguer, 1987; Leis, 1989).

Durante los primeros años de la dictadura militar, las acciones que desplegaron este conjunto de organizaciones y grupos, que fueron constituyéndose poco a poco en un movimiento integrado, estuvieron vinculadas con la búsqueda de las y los detenidos desaparecidos, la liberación de los presos políticos y la denuncia internacional

de los crímenes. Las estrategias fueron múltiples: presentación de *hábeas corpus* y recursos judiciales, publicación de solicitadas, entrevistas con representantes de las Iglesias, con militares y con personalidades que pudieran respaldar sus reclamos. Las consignas de “Aparición con Vida”, instalada con fuerza desde 1980 hasta la transición, y “Juicio y castigo a (todos) los culpables”, que cobró fuerza luego de la derrota de la Guerra de Malvinas, tuvieron alta capacidad de impregnación en los tiempos de la transición a la democracia. Luego del Juicio a las Juntas Militares, en 1984, que condenó a los máximos responsables de los delitos cometidos durante la dictadura, sobrevinieron los alzamientos “carapintadas”⁵ que presionaron al gobierno, logrando las leyes conocidas como “de la impunidad” (Ley de Punto Final y Ley de obediencia Debida, durante el gobierno de Alfonsín) y, luego, la serie de indultos presidenciales de Menem a civiles y militares condenados. Ante ese marco legal no se pudo reactivar el enjuiciamiento a los militares, por lo que, hacia fines de los noventa y principios del nuevo siglo, algunos organismos de derechos humanos promovieron la realización de los llamados Juicios por la Verdad (procedimientos judiciales, pero sin efectos penales, es decir, sin posibilidad de condenar a los acusados). Con la aparición de la Agrupación HIJOS, el repertorio asumió una renovación, siendo el “escrache”⁶ una de las prácticas distintivas.

Tras la derogación de las leyes de impunidad en 2003, se llevaron a juicio a múltiples acusados en los llamados Juicios de Lesa Humanidad, proceso que continúa en la actualidad. En este contexto, este movimiento encabezó las luchas por la memoria, la verdad, la justicia y los derechos humanos ante el avance de discursos negacionistas.

⁵ Nombre con el que se conoció a una serie de levantamientos de un sector del Ejército argentino, ocurridos entre 1987 y 1990.

⁶ Tipo de protesta en contra de una persona pública que se realiza generalmente frente a su domicilio o lugar de trabajo.

Es relevante aclarar que las acciones de este movimiento no fueron incluidas dentro de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas, sino que fueron relevados bajo la categoría emergente de Objetivo 18 Otros: Objetivos por la memoria y los DDHH.

Como tercer punto, en sus expresiones recientes y en sintonía con movimientos en otros países, el movimiento feminista ha emergido como una fuerza política y social significativa en Argentina, desafiando las estructuras patriarcales. A lo largo del último tiempo el movimiento feminista ha logrado hitos importantes que dieron forma a su agenda y sus acciones. Uno de los momentos cruciales en su trayectoria fue la irrupción del movimiento “Ni Una Menos” en el año 2015, con su consigna “Vivas nos queremos”, que destacó la violencia machista como un problema público y político, y que demandó al Estado nacional la efectiva implementación de la Ley de Protección integral de las mujeres (Ley nº 26.485). Otro momento clave fue la movilización por la legalización del aborto, que culminó con la aprobación de la ley a finales de 2020, luego de varias décadas de presentaciones infructuosas ante el Congreso Nacional y de una primera votación negativa en 2018. La aprobación de la Ley Nacional de Acceso a la Interrupción del Embarazo (Ley nº 27.610) se logró varios años después de que la alianza de organizaciones reunida en la “Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” presentase el primer proyecto de ley. Esta victoria marcó un antes y un después en la lucha feminista en el país, aunque la implementación efectiva de la ley y el acceso equitativo a servicios de interrupción del embarazo siguen siendo objetivos prioritarios. Asimismo, con el propósito de facilitar el acceso efectivo al derecho al aborto, han surgido —dentro del marco de la Campaña— diversas redes fundamentales. Éstas incluyen la “Red de Socorristas”, la “Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir” o, la incipiente “Red de docentes”,

las cuales promueven la defensa de los derechos reproductivos y la efectiva implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley nº 26.150).

Según Barrancos (2020), el impacto del movimiento #NiUnaMenos en Argentina fue enorme porque hizo una interpretación de gran alcance, debido a que el sujeto interpelado fue el mismo sujeto actoral: las mujeres, visibilizadas por su interpellación al patriarcado como entidad social. La autora destaca que esta movilización tuvo como resultado una significativa activación subjetiva y colectiva entre las mujeres, que se vio intensificada con la “Marea Verde”⁷ por la legalización del aborto. En este contexto, se llevaron a cabo una serie de acciones a nivel nacional, como pañuelazos, reuniones, asambleas, talleres, así como la masificación del Encuentro Nacional de Mujeres, transformado en Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias a partir de 2019.

Además de su implicación en la lucha contra la violencia por razones de género y la legalización del aborto, el movimiento feminista ha dirigido sus esfuerzos hacia la promoción de políticas de igualdad en una variedad de ámbitos, incluyendo el trabajo, la educación y la participación política. La interacción con el Estado ha sido compleja, marcada por la necesidad de ejercer presión constante para garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y la implementación de políticas públicas destinadas a fomentar la equidad de género. Como resultado de estas presiones, durante el mandato del Frente de Todos se institucionalizó la agenda feminista y de las cuestiones de género con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, poniéndose en marcha diversos Planes Nacionales de acción contra las violencias por razones de género, así como también, la Ley Micaela (2019) y la Ley de los Mil Días (2021).

⁷ Nombre que recibe el movimiento feminista por la legalización del aborto en América latina. Como símbolo característico de las campañas se emplea un pañuelo verde, de ahí su nombre.

En este contexto, el movimiento feminista argentino logró instaurar prácticas de lucha que resonaron a nivel nacional, con notables repercusiones en los ámbitos urbanos y una creciente inserción de esta agenda en otros campos y áreas de activismo, como el ámbito comunitario. A su vez, dentro de estos espacios surgieron nuevas formas de organización y acción colectiva, en las cuales el feminismo ha desempeñado un papel central en la configuración de vínculos sociales y en la politicidad de los sectores populares. Este fenómeno se ha manifestado especialmente a través de organizaciones barriales y vecinales, con una mayor atención a las intersecciones entre diferentes formas de opresión y discriminación.

También durante el transcurso de los últimos años, el movimiento LGTTBQ+ en Argentina ha sido protagonista de significativas transformaciones tanto legislativas como culturales, las cuales han tenido un impacto notable en el panorama de los derechos civiles en el país. A lo largo de las últimas décadas, este movimiento ha liderado una serie de iniciativas y manifestaciones destinadas a abordar aspectos fundamentales relacionados con la igualdad y la justicia para las personas cuyas orientaciones e identidades sexuales no se ajustan a los parámetros heteronormativos. Un hito significativo tuvo lugar con la campaña por el matrimonio igualitario, que alcanzó su apogeo con la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010 (Ley nº 26.618). Organizaciones emblemáticas como la Comunidad Homosexual Argentina (CHA, 1984) y la Federación Argentina LGBT (2005) desempeñaron roles fundamentales en esta lucha, movilizando a la sociedad civil y abogando por la igualdad de derechos ante la ley.

Además, el movimiento LGBTQ+ ha sido pionero en la promoción de la identidad de género autopercebida y el acceso a la atención médica para personas trans. El hito más notable en este ámbito fue la aprobación de la Ley de Derecho a la Identidad de Género en 2012 (Ley nº 26.743), representando un avance histórico en la garantía de

los derechos de las personas trans en Argentina. Este logro se atribuye en gran medida al activismo incansable de organizaciones como la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA, 1993) y el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género (FNLIG). Asimismo, bajo el Decreto N° 476/21 se promulgó el DNI no binario, enmarcado dentro de esta ley, reconociendo la identidad más allá del binomio masculino/femenino.

En su lucha contra la discriminación y la violencia, el movimiento LGBTTQ+ ha desempeñado un papel destacado en numerosas manifestaciones públicas y campañas de concientización, con la participación significativa de entidades como el Colectivo LGBTIQ+ y la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Trans (RAJAT). Asimismo, en el año 2021, se promulgó la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán - Lohana Perkins” (Ley n° 27.636), la cual estableció un cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional reservados para la comunidad travesti trans con el propósito de facilitar su acceso a empleos formales en condiciones de igualdad. El movimiento aspira a que el Estado continúe fortaleciendo estas políticas, debido a que la población travesti trans enfrenta una mayor vulnerabilidad como resultado de su exclusión temprana de las instituciones formales.

Cabe aclarar que las acciones emprendidas por este movimiento no fueron incluidas dentro de ninguno de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas, ya que el Objetivo 5 “Igualdad de género” solo contempla el binomio mujer-varón. En virtud de esta omisión, se han relevado bajo la categoría emergente de “Objetivo 18 Otros: Objetivos por los derechos de la comunidad LGBTTQ+”, incorporado en este trabajo.

Durante la década de 2000, otro movimiento que se consolidó es el socioambiental, el cual emergió en resistencia a los impactos

del modelo productivo. El avance en materia de derecho ambiental habilitó un marco para que esas resistencias pudieran fortalecerse y difundirse, alcanzando repercusión a nivel nacional. Entre los hitos que fueron dando forma a este proceso podemos mencionar la movilización en contra de la minería a cielo abierto, que se inicia en el año 2002 con la conformación de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados No a la Mina en la localidad patagónica de Esquel, difundiendo la movilización en contra de la minería en todo el país (Walter, 2008; Wagner, 2021). También fue significativa la lucha frente a la instalación de la planta de celulosa Botnia en las costas uruguayas del Río Uruguay, que dio lugar a una fuerte movilización en la ciudad argentina de Gualeguaychú desde el año 2003 y que tomó notoriedad a nivel nacional en 2005, convirtiéndose en un catalizador del debate en torno al ambiente y al perjuicio ambiental como daño colectivo (Merlinsky, 2008). Además, fue importante el conflicto por el uso de agrotóxicos protagonizados por mujeres pobladoras del barrio cordobés de Ituzaingó-Anexo (las Madres de Ituzaingó) instalando en la agenda pública la discusión sobre agrotóxicos en muchas ciudades del país y dando lugar a la emergencia de movimientos que pusieron foco en la utilización de pesticidas, tales como “Paren de Fumigarnos”, “Paren de fumigar las escuelas”, “Coordinadora Basta es Basta”, entre otros. Otro hito significativo fue la movilización en contra de la contaminación vinculada a desechos industriales del río Matanza-Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires, a mediados de 2000, a partir de la movilización de vecinos y la intervención de la Suprema Corte de Justicia. A su vez, en los últimos años se ha generado una importante movilización en relación al avance de emprendimientos inmobiliarios que pusieron en agenda la necesidad de protección de humedales, cuestión que cobró notoriedad en ámbitos urbanos a partir del avance del agronegocio y de proyectos inmobiliarios en zonas periurbanas, con efectos como inundaciones y escasez

de disponibilidad de agua en barrios aledaños, así como también la preservación de espacios verdes y de acceso a cuerpos de agua. Todos estos conflictos contribuyeron a instalar la cuestión ambiental en la agenda pública, generando una gramática de lucha en torno al tema en todo el país, con fuerte repercusión en los ámbitos urbanos. Como resultado de ello se promulgaron legislaciones, se avanzó en la generación de conocimiento sobre los problemas ambientales, se desarrollaron estrategias comunicativas que permiten difundir las consecuencias de determinados proyectos en las comunidades, se fortaleció un activismo mediático y se generó información para disputar el conocimiento y objetar estudios de impacto ambiental, entre otros logros (Wagner, 2021).

Por otro lado, en esta caracterización de los sectores movilizados de nuestra sociedad, también es necesario mencionar qué entendemos por movimientos por el derecho al hábitat urbano. Aquí pueden agruparse sectores que emergieron a partir del proceso de degradación de los espacios urbanos, intensificado durante la etapa de globalización neoliberal. Estos espacios han perdido paulatinamente su estatuto de lugares de uso para convertirse en lugares de intercambio, regidos por su valor de mercado.

La mercantilización del acceso a todos los bienes y servicios básicos ha consolidado una sociedad excluyente cuyas consecuencias se agravan debido a la concentración de la propiedad de la tierra y los comportamientos especulativos en el mercado de suelo y vivienda, sin controles o restricciones adecuadas. Los movimientos sociales que han reivindicado el derecho a la vivienda, se han organizado y orientado sus acciones de manera diferente según los períodos y los emergentes más urgentes de la cuestión.

Las movilizaciones en torno al acceso a los *servicios habitacionales* (Yujnovsky, 1984) en nuestro país, tomaron fuerte visibilidad a principios de la década del 80, cuando se conjuntaron algunos factores que

restringieron el acceso a la compra o el alquiler en sectores populares: la desregulación de los alquileres, el fin del ciclo de los loteos populares⁸ y los efectos de las políticas neoliberales en los ingresos de los sectores trabajadores (Clichevsky, 1975; Clichevsky et al., 1990; Fernandez Wagner, 2008).

Las ocupaciones de tierras y la formación de asentamientos populares comenzaron como respuestas organizadas a estas restricciones y a la crisis habitacional producida por las políticas macroeconómicas y urbanas de la dictadura cívico-militar. A principios de los años 80, aún bajo el gobierno dictatorial, se pusieron en marcha procesos colectivos para la toma de tierras y producción de asentamientos, organizados por sus destinatarios directos, con apoyo de militancia territorial y comunidades eclesiales de base, que enfrentaron a la institucionalidad para satisfacer necesidades básicas de vivienda y servicios. Entre sus características, se destacan las formas de organización a partir de la horizontalidad y las prácticas democráticas, la acción directa y la creación de espacios comunes o comunitarios que afianzaron la autoafirmación (Cravino y Vommaro, 2018).

Estas primeras organizaciones para la lucha por el derecho al hábitat urbano dejaron una marca significativa que se fue transformando con el retorno a la democracia, dando lugar a nuevas demandas y, a la vez, experimentando un proceso de formalización de la organización barrial. Pasados los años, las prácticas de ocupación de tierra se extendieron, así como el repoblamiento y la densificación de las villas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de la primera corona del conurbano bonaerense. Además, durante los años 90, bajo el gobierno neoliberal de Menem, se

⁸ Subdivisiones de suelo rural periférico sin condiciones de urbanización, que se vendía en el mercado formal de manera financiada a largo plazo. Incentivó la expansión periférica del AMBA y tuvo vigencia hasta 1977, cuando se sancionó el Decreto-ley de Ordenamiento territorial y usos del suelo (DL 8912/77) de la provincia de Buenos Aires.

desarmó la estructura estatal de intervención directa en vivienda⁹ y se generaron algunas condiciones para el crédito hipotecario privado dirigido a las clases medias, en consonancia con el precepto neoliberal de *facilitación* del acceso a la vivienda a través del mercado, “recomendado” por el Banco Mundial a los países fuertemente endeudados (Cuenya, 1997 y 2000). Asimismo, y en el contexto de privatización de empresas y bienes públicos, el gobierno de Menem habilitó propuestas de regularización de ocupaciones de suelo¹⁰, poniendo el acento en el acceso a la “propiedad de la vivienda” más que en el mejoramiento de las condiciones de vida y la resolución de causas estructurales del déficit habitacional (Relli Urgatamendía, 2018). Esas medidas de regularización reorientaron las demandas de las organizaciones sociales —que comenzaron a reclamar la titularidad de las tierras ocupadas— y se fueron generando al tiempo que se profundizaba la brecha entre la oferta habitacional formal y las posibilidades de acceso a la vivienda por la vía del mercado, debido a las consecuencias de las políticas neoliberales en el crecimiento del desempleo, la precarización laboral y el deterioro de los salarios.

En ese contexto, también como respuestas colectivas y organizadas frente al deterioro de las condiciones de vida, se gestaron procesos masivos de movilización popular protagonizados por los movimientos de trabajadores desocupados, con fuerte anclaje territorial¹¹. Para analizar este fenómeno, se han desarrollado categorías

⁹ El Fondo Nacional de la Vivienda fue desfinanciado, descentralizado a las provincias y, más tarde, se permitió su uso libre como parte de las arcas generales de las provincias.

¹⁰ Con la creación de la Comisión Nacional de Tierras Fiscales “Programa Arraigo” y la sanción de la Ley Nacional de Titularización de Inmuebles (Ley nº 24.374). Asimismo, la provincia de Buenos Aires activó múltiples mecanismos en la misma línea de regularización con foco mayoritariamente en la titulación.

¹¹ Entre los que podemos mencionar a la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Corriente de Trabajadores Desocupados “Aní-

como “territorialización de la política”, “politización de lo barrial” e “inscripción territorial”, las cuales apuntan a comprender la transformación de los escenarios de lucha ante la crisis de la sociedad salarial y los procesos de desafiliación en el pasaje de la fábrica a la comunidad barrial local (Svampa y Pereyra, 2003).

Durante la primera década del siglo XXI, tras la crisis socio-económica de los años 2001 y 2002 y en el marco de las medidas contracíclicas del gobierno de Néstor Kirchner, comienzan a impulsarse políticas habitacionales que renovaron el interés por las condiciones urbanas de los barrios. El Plan Federal de Vivienda significó una fuerte inversión para la construcción de unidades habitacionales a partir del modelo tradicional de construcción por empresas y entrega llave en mano, pero también incluyó algunos programas para ser ejecutados por organizaciones sociales en procesos de autoconstrucción, que llevaron a la profesionalización y modificación de las organizaciones dedicadas al hábitat urbano. Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires, la sanción de la Ley nº 341¹² facilitó la construcción de conjuntos habitacionales bajo gestión cooperativa, tales como los desarrollados por el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y el Movimiento Territorial de Liberación (MTL). Las organizaciones sociales que impulsan procesos de producción social del hábitat (y que se han constituido en torno a ellos), abordan integralmente la problemática del habitar, considerando a la vivienda en su contexto urbano y enfocando también la lucha por la *localización* que, en estos entornos, puede dar lugar o limitar el acceso a servicios y equipamientos colectivos (Rodríguez y Zapata, 2020; Rodríguez, 2021).

bal Verón”, el Movimiento de Trabajadores Desocupados “Aníbal Verón”, el Movimiento Teresa Vive, entre otros.

¹² Sancionada por demanda de un conjunto de organizaciones de la ciudad, dio lugar al Programa de Autogestión de la Vivienda que financió la compra de suelo y la construcción de más de 1000 viviendas de manera autogestiva.

En Argentina, han sido muy escasos los apoyos públicos a los procesos autogestivos, generadores de vivienda y ciudad, y su demanda ha estado presente en algunas de las organizaciones mencionadas bajo el precepto de que la autogestión motoriza la lucha por el derecho a la ciudad y la construcción de territorios democráticos, promoviendo la idea de un hábitat más humano. La *producción social del hábitat* emerge de la acción activa de quienes buscan satisfacer su necesidad de vivienda en procesos colectivos y organizados, en articulación con otras organizaciones sociales y con entidades gubernamentales¹³, y con un horizonte que excede la mera satisfacción de esas necesidades y plantea el cambio social.

Asimismo, podemos notar la creciente incorporación de estas mismas prácticas y sentidos en otros ámbitos de lucha, como el barrial. Se ha subrayado el rol crucial del “barrio” en la configuración de los vínculos sociales y la politicidad de los sectores populares. El barrio dejó de ser considerado como un mero escenario y pasó a analizarse como un centro de acción colectiva, movilización y configuración identitaria (Auyero, 2001; Merklen, 2005; Grimson, 2009). Frente a la desarticulación de las protecciones sociales y el fortalecimiento de los lazos de cooperación a nivel local, cobraron relevancia las sociedades vecinales o de fomento, organizaciones villeras y de asentamientos, y asambleas barriales. Lo barrial condensó en estos grupos un conjunto de valores y experiencias socio-organizacionales, en muchos casos vinculadas a necesidades de reproducción social¹⁴. Todas ellas buscan transformar la realidad de los barrios populares y fortalecer el trabajo en comunidad a partir de la educación

¹³ Esta articulación es una de sus mayores fortalezas organizativas, ya que permite la sostenibilidad en el tiempo de las demandas por mejoras en las viviendas y por la introducción de equipamientos urbanos.

¹⁴ Entre estos movimientos de base se destacan organizaciones como La Poderosa, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, entre otros.

popular, emprendimientos autogestivos de empleo y producción, culturales o deportivos, entre otras diversas propuestas. Dentro de este movimiento también identificamos las acciones protagonizadas por “vecinos”, quienes se organizan en asambleas barriales, grupos de vecinos unidos, juntas vecinales y asociaciones civiles. Estos grupos reclaman por cuestiones relacionadas con la vivienda y el hábitat, así como por el cuidado del espacio público y patrimonial. Sus demandas buscan la preservación de espacios públicos compartidos, áreas verdes y espacios culturales de cada barrio.

Las restricciones estructurales para el acceso a la vivienda, agravadas en períodos de crisis, han generado una demanda que, lejos de reducirse, se profundiza. Desde los años 80 hasta la actualidad, las ocupaciones de suelo no han cesado, tanto en áreas intersticiales como en extensiones de suelo vacante en la periferia metropolitana. En estas ocupaciones, además de los esfuerzos de urbanización y provisión de servicios, equipamientos y viviendas, se enfrenta la inseguridad de la tenencia del suelo debido a la irregularidad en el acceso. A pesar de las medidas que han intentado regularizar las ocupaciones (de muy bajo impacto real), de las obras de mejoramiento que se han introducido en algunos barrios y de los esfuerzos de sus habitantes, el déficit habitacional sigue siendo una deuda de la democracia en nuestro país.

Actualmente, las tendencias globales de creciente financiarización del desarrollo urbano y mercantilización de la vivienda agudizan las restricciones al acceso a la vivienda en las grandes ciudades, afectando a sectores cada vez más amplios de la sociedad, incluso a los de ingresos medios, tradicionalmente dentro del mercado, problemática que promueve la organización y una serie de acciones que reclaman, por ejemplo, la regulación de los alquileres.¹⁵

¹⁵ La organización Inquilinos Agrupados encabezó la pelea por la modificación de la ley de alquileres (Ley n° 27.551); en 2017 se creó la Federación de Inquilinos Nacional que reúne gran parte de las organizaciones inquilinas del país.

2021: Pandemia y después...

Además de la caracterización del contexto sociopolítico y territorial urbano, corresponde hacer mención a algunos aspectos sociosanitarios que distinguieron coyunturalmente el año del relevamiento, como resultado de los efectos de la pandemia.

La pandemia de Covid 19 fue un evento disruptivo que tuvo un impacto notable en los territorios, principalmente, durante los años 2020 y 2021. Por un lado, nos referimos a los aspectos sanitarios y epidemiológicos vinculados a las medidas de cuidado esencial y al control del riesgo de contagios que trastocaron el normal funcionamiento de las relaciones sociales, modificando las actividades cotidianas de la población. Por otro lado, a las políticas públicas de aislamiento y distanciamiento social¹⁶ que introdujeron restricciones a la movilidad y al contacto físico entre personas, afectando de manera diferencial a los distintos grupos sociales y territorios.

La cuestión urbana y las condiciones de acceso al hábitat y la ciudad se encontraron entre los puntos críticos que requerían intervención estatal prioritaria.

¹⁶ El AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (ASPO) fue establecido el 19 de marzo de 2020 mediante el Decreto DNU del Poder Ejecutivo Nacional N°297/20, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2020. Este plazo fue posteriormente prorrogado hasta el 7 de junio de 2020 (a través de los Decretos N° 260/20, 287/20, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20) y, en algunos territorios, hasta el 30 de agosto de 2020 (según Decretos N°520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20 y 700/20). Paralelamente, el DISTANCIAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (DISPO) fue declarado el 7 de junio de 2020 a través del Decreto DNU del Poder Ejecutivo Nacional N°520/20, habilitando actividades en los diferentes territorios acorde al desarrollo de parámetros epidemiológicos y sanitarios. Estas medidas estuvieron vigentes hasta fines del año 2021 e inicios del 2022, presentando modificaciones específicas en algunos momentos y regiones, acorde a un sistema de fases que comprende medidas con diferentes grados de aislamiento y distanciamiento social (posteriormente prorrogado hasta el 1 de octubre del año 2021 según Decretos N° 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 700/20, 714/20, 754/20,

El diagnóstico realizado en Argentina por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus (CONICET - MINCYT - AGENCIA), tempranamente identificó: “comportamientos sociales de mayor riesgo de contagio (...) debido a escasas posibilidades sanitarias y de higiene persistentes en sus entornos vitales (exposición constante a infecciones vinculadas a contaminación ambiental, contacto con basurales, sin acceso a servicios y falta de higiene urbana).” (Kessler et al. 2020, p. 7). Esta situación crítica vinculada a la precariedad habitacional, la falta de acceso a servicios básicos, la contaminación ambiental y el hacinamiento fue una problemática estructural que impidió el acomatamiento de las medidas de ASPO y DISPO durante la cuarentena por Covid. En este sentido, se identificó que, para quienes habitaban en asentamientos precarios y barrios populares “no es posible entender la cuarentena como un aislamiento dentro de las casas en sentido estricto, sino, en todo caso, dentro del perímetro del barrio” (ibid, p. 22).

La importancia de las relaciones entre casa, barrio y ciudad apareció reconfigurada por nuevas escalas y prácticas, vinculadas al territorio vivido y utilizado por la población. Asimismo, la dimensión urbana fue jerarquizada como un factor de amplificación del impacto de la pandemia de Covid-19 y condición de cumplimiento de las medidas de cuidado de la salud y prevención de contagios. De este modo, las desigualdades sociales y urbanas actuaron como un elemento determinante de dificultades y multiplicaron el impacto de la pandemia, afectando con mayor fuerza a algunos grupos sociales específicos. Por obvio que pueda parecer, para poder *quedarse en casa* hay que tener acceso a una vivienda y, además, poder permanecer en ella cumpliendo el aislamiento requiere condiciones de habitabilidad apropiadas (no sólo en sus características constructivas, sino también, en su integración como parte del hábitat urbano).

Las posibilidades de quedarse en casa no fueron iguales para toda la población, ni tampoco lo fue el acceso a los bienes, servicios

y a la calidad de vida urbana en general. Las problemáticas de acceso a la ciudad, a la salud, al trabajo, a la educación, a los cuidados y a las políticas públicas se multiplicaron durante los años 2020 y 2021, con el impacto de las sucesivas olas del virus Covid-19 en los territorios.

Esta condición de desigualdad socioespacial urbana no sólo se manifestó en sus dimensiones materiales —carencias en vivienda, servicios, infraestructura, hábitat—, sino también en su intersección con otras necesidades, prácticas y problemas relacionados con la experiencia de habitar: la subsistencia de trabajadores informales; las situaciones de violencia intrafamiliar y de género; las dificultades para pagar alquileres y servicios; la preocupación ante el cierre de centros comunitarios; el desconocimiento de formas de tramitación de beneficios sociales; y la dificultad para dar continuidad a la educación bajo modalidad virtual, entre otras (Kessler et al., 2020).

La pandemia impactó en el agravamiento de otras situaciones, como la pobreza energética,¹⁷ las problemáticas de salud mental y la violencia intrafamiliar y de género. Pero, a su vez, desde la sociedad civil se generaron iniciativas solidarias y múltiples procesos de organización comunitaria. Algunos de ellos confluyeron con procesos más amplios de acción y movilización social, destacándose organizaciones y movimientos sociales que impulsaron diversas acciones colectivas socioespaciales y socioterritoriales. Estas iniciativas conformaron un proceso de lucha por la recomposición de las condiciones de vida y la ampliación de derechos.

Desarrollamos esta información para dar cuenta de que, producto del contexto pandémico y sus restricciones, se registraron algunos cambios significativos en la modalidad de las acciones colectivas. Durante este período, se observó un gran número de hechos “virtuales”, con rasgos y finalidades comunicativas que se desarrollaron a

¹⁷ Se considera pobreza energética a la situación en la que un hogar no logra satisfacer sus necesidades energéticas de manera continua, segura y estable (Rijter y otros).

través de redes sociales. Entendemos que estas acciones colectivas virtuales constituyen una adaptación asociada a las restricciones de las políticas de ASPO y DISPO desarrolladas durante la pandemia, las cuales desalentaron las modalidades tradicionales de protesta y lucha de los movimientos sociales.

3. Base de datos. Análisis de resultados

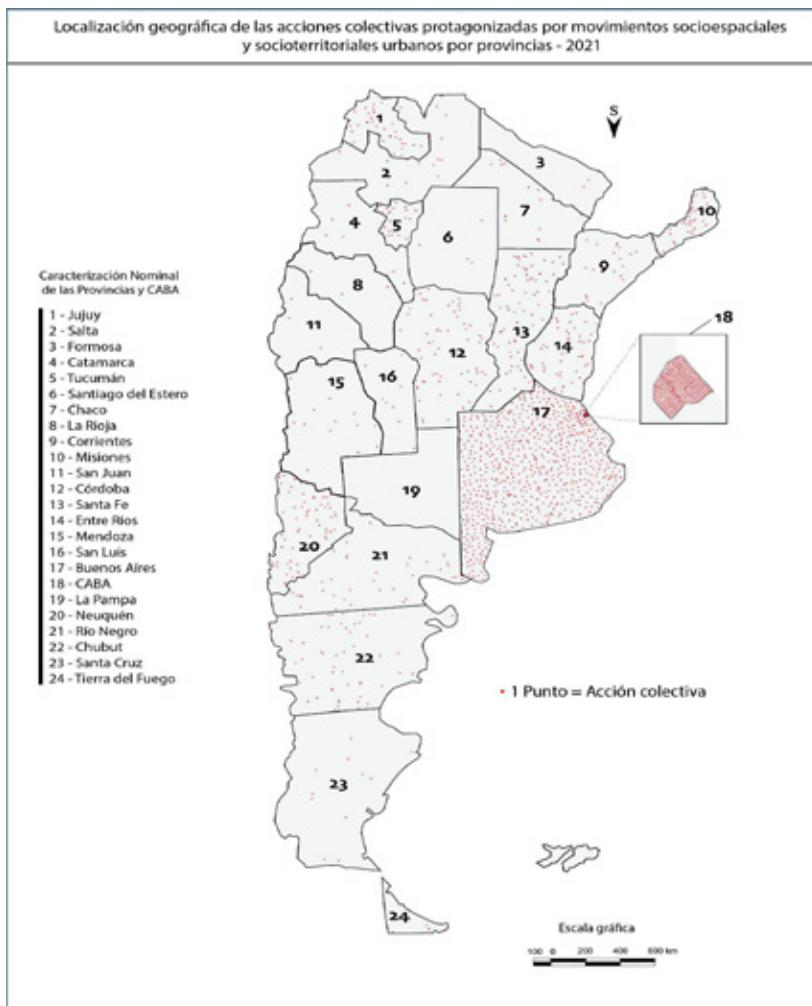
En esta sección, abordamos el análisis de los resultados del relevamiento de noticias desarrollado durante el año 2021, que en total sumaron 1390 acciones colectivas. Se registró una importante variedad de fuentes de información ya que las noticias registradas tuvieron un carácter federal, con la participación de 528 medios de prensa digital distintos.

A partir del relevamiento realizado pudimos identificar más de 400 organizaciones y movimientos sociales que protagonizaron acciones colectivas socioespaciales y socioterritoriales a lo largo y ancho del país.

Cartografía de las acciones colectivas protagonizadas por movimientos socioespaciales y socioterritoriales urbanos

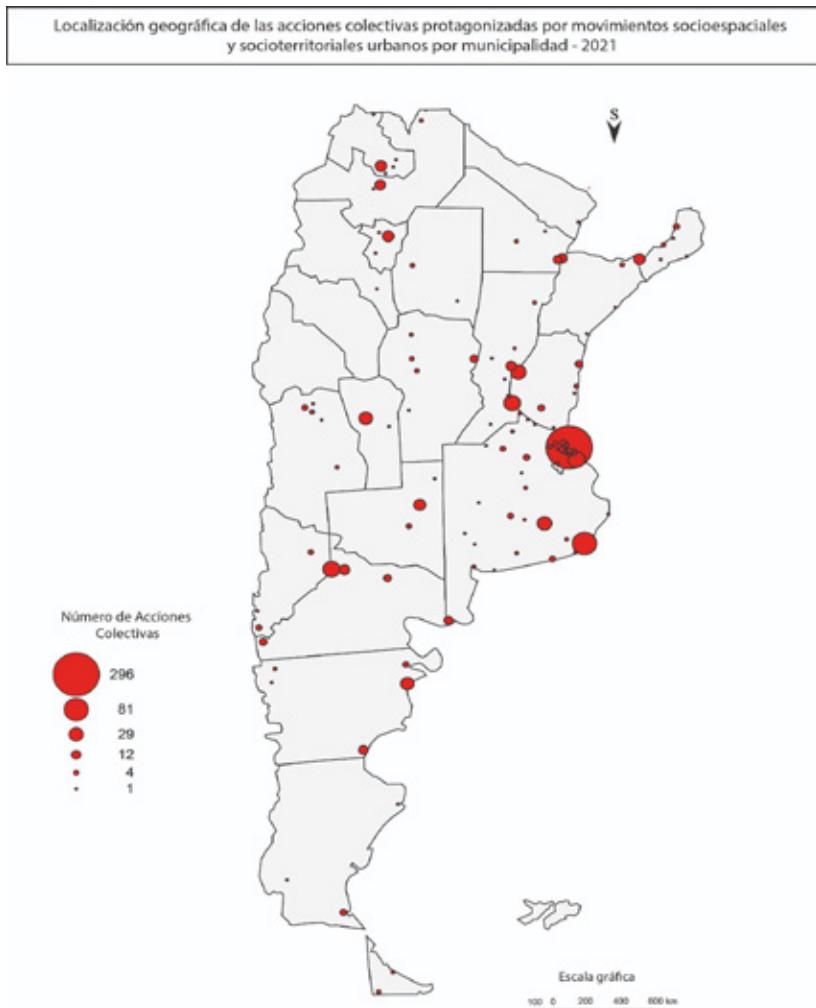
A pesar del contexto sanitario, el ejercicio de la acción colectiva fue activo y numeroso en todo el país, como puede observarse en los mapas (Mapas 1, 2, 3 y 4).

Mapa 1. Localización geográfica de las acciones colectivas protagonizadas por movimientos socioespaciales y socioterritoriales urbanos por provincias - 2021



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Mapa 2. Localización geográfica de las acciones colectivas protagonizadas por movimientos socioespaciales y socioterritoriales urbanos por municipalidad - 2021



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Cabe resaltar que los mapas por círculos permiten representar datos cuantitativos de manera proporcional a los valores arrojados.

Este método permite una visualización intuitiva de la distribución y magnitud de los datos espaciales, facilitando la identificación de patrones y tendencias, siendo especialmente eficaz para representar datos cuantitativos. Cada círculo se posiciona en el punto geográfico correspondiente al dato que representa; en el mapa 2, los círculos fueron posicionados en el centro de las unidades de las localidades urbanas de Argentina. La relación entre el área del círculo y el valor de los datos facilita la comparación visual directa entre diferentes puntos en el mapa. Por último, la elección del radio de los círculos es un aspecto relevante para garantizar que la visualización sea precisa y fácilmente interpretable, basándose en la proporcionalidad entre el área del círculo y los valores de los datos, lo cual es fundamental para garantizar la precisión y claridad de la visualización.

Destacamos la provincia de Neuquén que, pese a ser un centro urbano con menor concentración demográfica, presentó un alto grado de conflictividad en relación a otras provincias con mayor población, como, por ejemplo, Córdoba.

Esto también se expresa en la distribución territorial de las acciones (Tabla 1 y Gráfico 1).

Antes de analizar la tabla y el gráfico 1, nos parece oportuno señalar algunas características de la estructura de poblamiento de nuestro país. Argentina es un país altamente urbanizado, con un 92% de su población viviendo en áreas urbanas (CNPHV 2010)¹⁸.

¹⁸ La temprana urbanización estuvo ligada a la masiva recepción de población migrante europea. Entre 1869 y 1914 arribaron 4.363.000 personas que, mayoritariamente, se asentaron en los centros urbanos, por lo que Argentina, en 1914, registraba el 53% de la población urbana (Recchini de Lattes, 1973). Esto se explica, por un lado, por la centralidad del puerto de Buenos Aires y su posición estratégica para la salida de productos primarios, reforzada por la configuración radial del ferrocarril[#] (Rofman y Romero, 1997). Y, por otro lado, por la producción extensiva y la estructura concentrada de la propiedad de la tierra agrícola que no alojó masivamente a las familias allegadas,

Los índices más altos de población urbanizada se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires. En el extremo sur del país, se encuentran los territorios menos densamente poblados, pero también se observa una intensa urbanización, especialmente en provincias como Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La historia económica del país, desde su constitución como nación, ha estado marcada por el avance sobre los pueblos originarios y la apropiación de sus territorios. Este proceso, junto con la adopción de modelos económicos diversos, desde el primario exportador, hasta la industrialización y la re-primarización, han ido consolidando una configuración territorial macrocefálica que actualmente concentra un 37,6% de la población en tres grandes aglomerados: el Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 municipios del Gran Buenos Aires), Gran Córdoba (Ciudad de Córdoba y 13 localidades) y Gran Rosario (Ciudad de Rosario y 17 localidades) (CNPHV, 2022), con una notable preeminencia del AMBA sobre los otros dos.

Conforme fue avanzando el siglo XX, se consolidó esa estructura territorial concentrada y urbanizada, principalmente sobre el AMBA, donde se encuentran los mayores déficits de servicios habitacionales urbanos. Este proceso de urbanización ha estado históricamente signado por la desigualdad socioespacial, tanto al tomar como referencia el contexto nacional (con fuertes desigualdades regionales), como al interior de las ciudades.

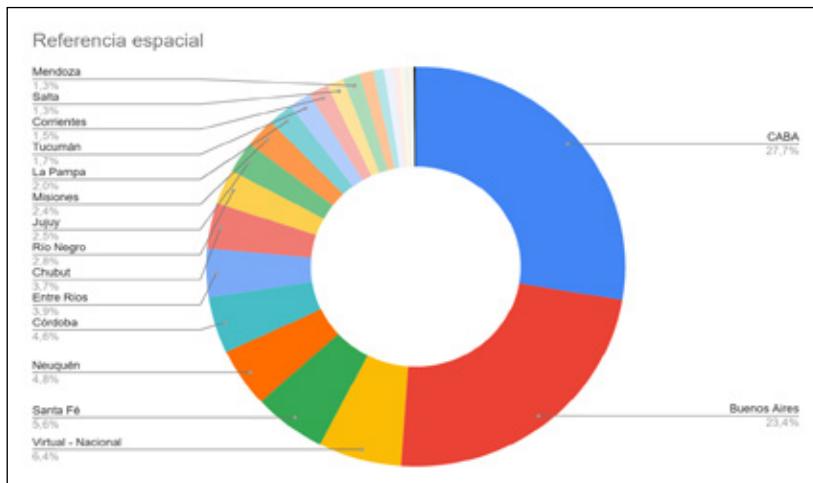
con excepción de los casos de las colonias agrícolas, generadoras de un sector de medianos y pequeños productores, pero que no fueron la forma mayoritaria de acceso al suelo y poblamiento del territorio (Gutman, 1988).

Tabla 1. Referencia espacial de las acciones colectivas según cantidad y porcentaje. Argentina (2021)

Referencia espacial	Cantidad	Porcentaje
CABA	383	27,69
Buenos Aires	324	23,43
Virtual - Nacional	89	6,44
Santa Fé	78	5,64
Neuquén	66	4,77
Córdoba	63	4,56
Entre Ríos	54	3,90
Chubut	51	3,69
Río Negro	39	2,82
Jujuy	35	2,53
Misiones	33	2,39
La Pampa	27	1,95
Tucumán	24	1,74
Corrientes	21	1,52
Salta	18	1,30
Mendoza	18	1,30
Chaco	15	1,08
Santa Cruz	11	0,80
Catamarca	9	0,65
San Luis	8	0,58
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	5	0,36
Santiago del Estero	4	0,29
San Juan	3	0,22
La Rioja	3	0,22
Formosa	2	0,14
TOTAL	1383	100,00

Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Gráfico 1. Referencia espacial de las acciones colectivas según cantidad y porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

El Gráfico 1 muestra que CABA es la principal referencia espacial con el 27,7% del total de la muestra. En segundo lugar, se encuentra la provincia de Buenos Aires con un porcentaje del 23,4%. En conjunto, ambas representan más de la mitad de lo relevado, co-relacionándose con la cantidad de población que habita en estos distritos. Por otro lado, las acciones Virtual - Nacional, representan el 6,4%; y, las acciones realizadas en Santa Fe, el 5,6%. Estas son seguidas por Neuquén, 4,7%; y Córdoba, 4,5%. Las provincias restantes se ubicaron por debajo del 4%.

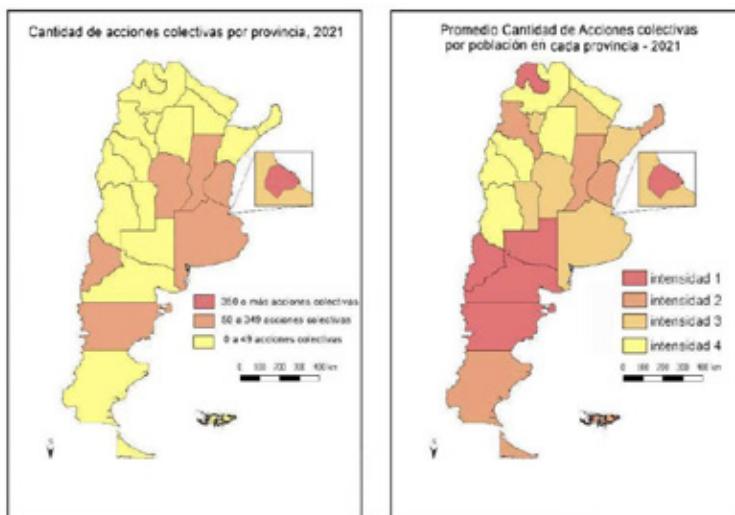
El mapa 3 representa la cantidad de acciones colectivas llevadas a cabo en cada provincia. En color amarillo se representan los casos en los que la cantidad de acciones se encuentran entre 0 y 49, mientras que en naranja los casos en los que la cantidad de acciones va de 50 a 349. Por su parte, el color rojo son aquellos casos en los que se superan las 350 acciones.

El mapa 4 muestra el promedio de cantidad de acciones colectivas llevadas a cabo por distintos tipos de movimientos socioterritoriales

según la cantidad de población con la que cuenta cada provincia. En esa línea, se decidió definir el resultado de estos promedios como la intensidad de las acciones por cada provincia, agrupándolas en distintos niveles: 1, 2, 3 y 4, donde 1 refiere al mayor grado de intensidad y 4 al menor. Este mapa busca mostrar en qué medida el promedio de acciones colectivas por cantidad de población por provincia refleja que no necesariamente los lugares con mayor cantidad de población y mayor cantidad de acciones colectivas desarrolladas son aquellos que poseen una mayor intensidad.

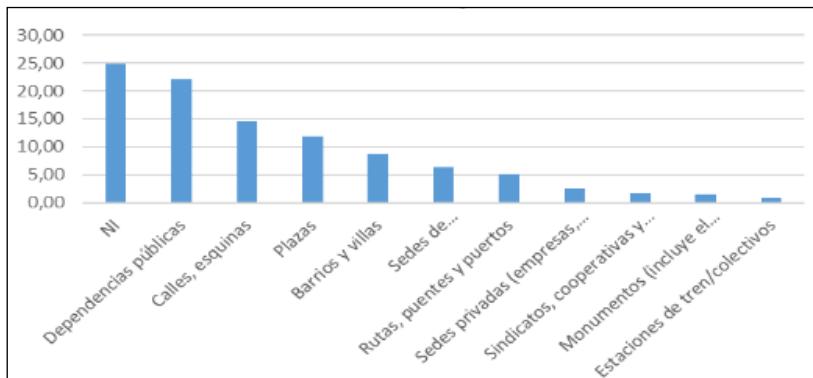
Encontramos que hay lugares en los que, aunque la densidad de población no sea alta, puede haber un mayor nivel de intensidad producto de las acciones colectivas que allí se desplegaron. Si analizamos el mapa de cantidad de acciones por provincia, encontramos que los resultados son bien distintos cuando son sometidos a promedios para analizar ese nivel de intensidad.

Mapas 3 y 4. Cantidad de acciones colectivas por provincia - 2021 y Promedio cantidad de acciones colectivas por población en cada provincia - 2021



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Gráfico 2. Localización del lugar de convocatoria de las acciones colectivas según porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

A su vez, al observar los lugares donde se realiza la acción colectiva (Gráfico 2), si bien hubo muchas noticias que no lo mencionan (de allí el alto porcentaje de No Informa), se registró una variedad de locaciones urbanas. Se destacan las dependencias públicas (con un 22,09%), seguidas por las calles y esquinas (14,67%) y las plazas (11,81%). Por debajo del 10% se ubicaron sitios como sedes, rutas, puentes, puertos, empresas, sindicatos, cooperativas, monumentos y estaciones de tren o colectivos. Como puede observarse no se trata únicamente de puntos estratégicos de la vida en la ciudad, como sedes de instituciones clave para los reclamos (por ejemplo, las sedes de organismos públicos, privados, sindicales) y vías de circulación como calles o rutas, sino también sitios de carácter más simbólico como monumentos y plazas, que permiten alterar la vida cotidiana y visibilizar los reclamos.

Principales variables analizadas

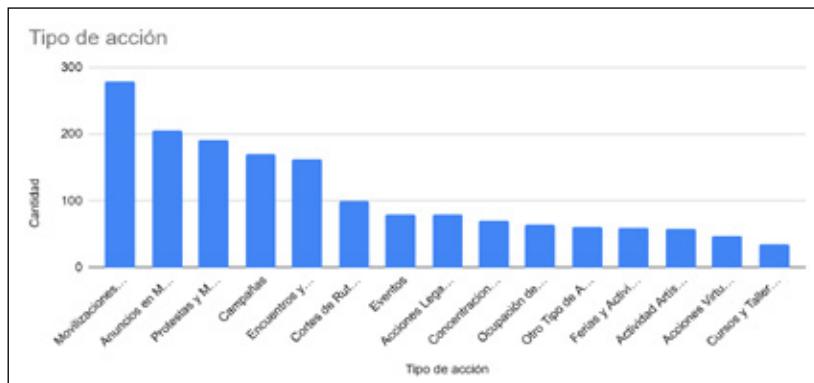
Tipos de acción

Tabla 2. Referencia del tipo de acciones colectivas según cantidad y porcentaje. Argentina (2021)

Tipo de acción	Cantidad	Porcentaje
Movilizaciones y Marchas	279	16,74
Anuncios en Medio	205	12,30
Protestas y Manifestaciones	192	11,52
Campañas	171	10,26
Encuentros y Reuniones	163	9,78
Cortes de Ruta y Bloqueos	100	6,00
Eventos	80	4,80
Acciones Legales	79	4,74
Concentraciones Alternativas	71	4,26
Ocupación de Espacios	64	3,84
Otro Tipo de Acción	61	3,66
Ferias y Actividades Comerciales	60	3,60
Actividad Artísticas y Deportivas	59	3,54
Acciones Virtuales	48	2,88
Cursos y Talleres	35	2,10
TOTAL	1667	100,00

Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Gráfico 3. Referencia del tipo de acciones colectivas según cantidad



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

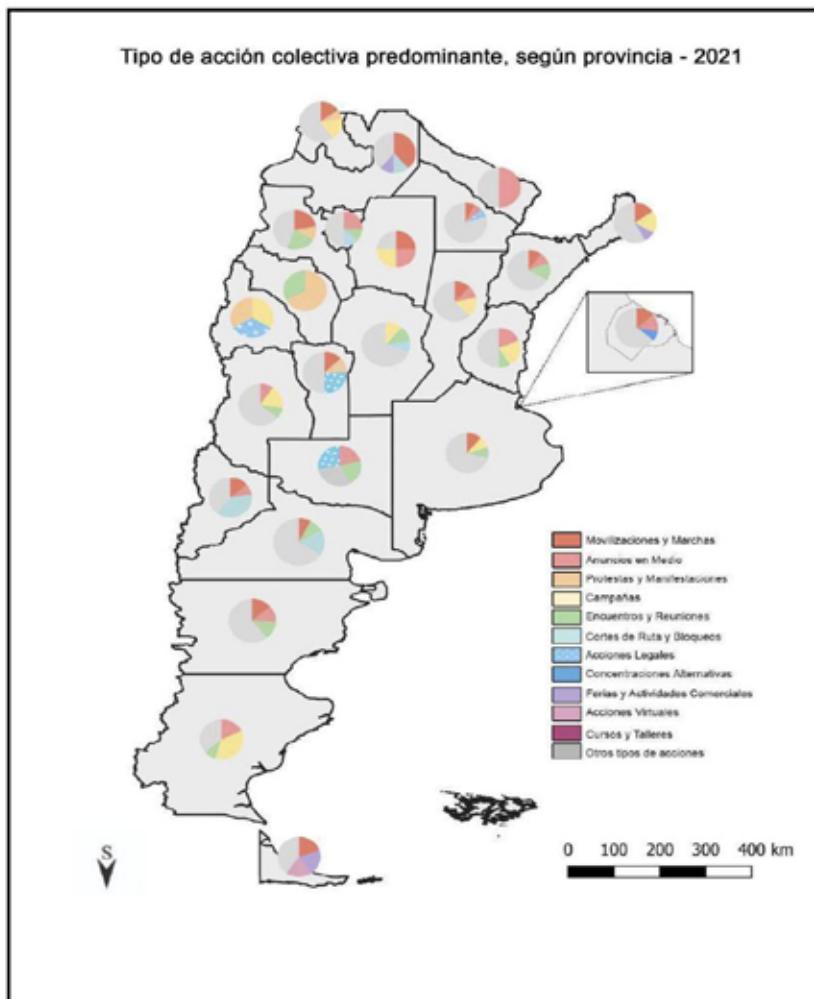
Como puede observarse (Tabla 2 y Gráfico 3), las movilizaciones/marchas (16,7%) y los anuncios en medios (12,3%) fueron los tipos de acción colectiva más frecuentes. A su vez, las protestas y manifestaciones (11,5%) y las campañas (10,2%) son las otras opciones más habituales, concentrando el 50 % de las acciones. Asimismo, los datos muestran cierta preeminencia de acciones socioespaciales. Entre ellas cabe destacar aquellas que tienen una mayor densidad espacial, tales como las movilizaciones/marchas y protestas/manifestaciones, a lo que podemos sumar las ferias y actividades comerciales que suelen organizarse en el espacio público. Además, los cortes de ruta constituyen el 6% de las acciones, un dato que debe ponderarse teniendo en cuenta que se llevaron a cabo en un contexto en el que estaban vigentes las políticas de DISPO. Si sumamos la ocupación de espacios (3,84%) vemos que casi el 10 % de las acciones tienen un carácter contencioso y pueden considerarse acciones socioterritoriales.

Paralelamente, es importante destacar que las diferentes acciones se distribuyeron geográficamente con ciertas variaciones provinciales (Mapa 4).

En el mapa 5 se observan gráficos de torta en cada provincia en los que se jerarquizaron los tipos de acciones más recurrentes.

Los tipos de acción predominantes a nivel nacional fueron las movilizaciones y marchas junto con protestas, manifestaciones y campañas. Sin embargo, resulta interesante destacar que hay ciertos tipos de acción que son propios de algunas regiones particulares como por ejemplo los cortes de ruta y bloqueos, visualizados mayormente en las provincias del norte de la Patagonia.

Mapa 5. Tipo de acción colectiva predominante, según provincia - 2021



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

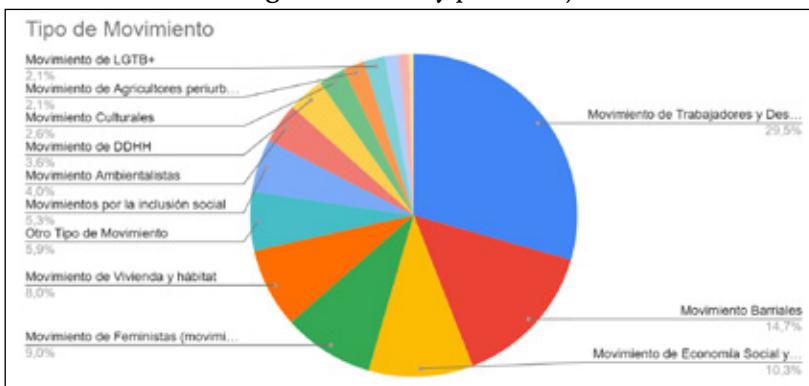
Tipo de movimiento

Tabla 3. Referencia de los tipos de movimientos según cantidad y porcentaje. Argentina (2021)

Tipo de movimiento	Cantidad	Porcentaje
Movimientos de Trabajadores y Desocupados	605	29,47
Movimientos Barriales	301	14,66
Movimientos de Economía Social y Solidaria	212	10,33
Movimientos Feministas	185	9,01
Movimientos de Vivienda y hábitat	164	7,99
Otro Tipo de Movimientos	121	5,89
Movimientos por la inclusión social	109	5,31
Movimientos Ambientalista	83	4,04
Movimientos de DDHH	74	3,60
Movimientos Culturales	54	2,63
Movimientos de Agricultores periurbanos o urbanos	43	2,09
Movimientos de LGTB+	43	2,09
Movimientos Estudiantiles	28	1,36
No Indica	21	1,02
Movimientos de Jóvenes	10	0,49
TOTAL	2053	100,00

Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Gráfico 4. Referencia de los tipos de movimientos según cantidad y porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Los datos (Tabla 3 y Gráfico 4), muestran la centralidad del trabajo a la hora de analizar los tipos de movimientos que más cantidad de acciones colectivas han protagonizado.

A su vez, si sumamos los movimientos sociales vinculados a cuestiones laborales (Economía Social y Solidaria; de agricultores periurbanos y de trabajadores y desocupados), los mismos representan casi el 41,90% del total.

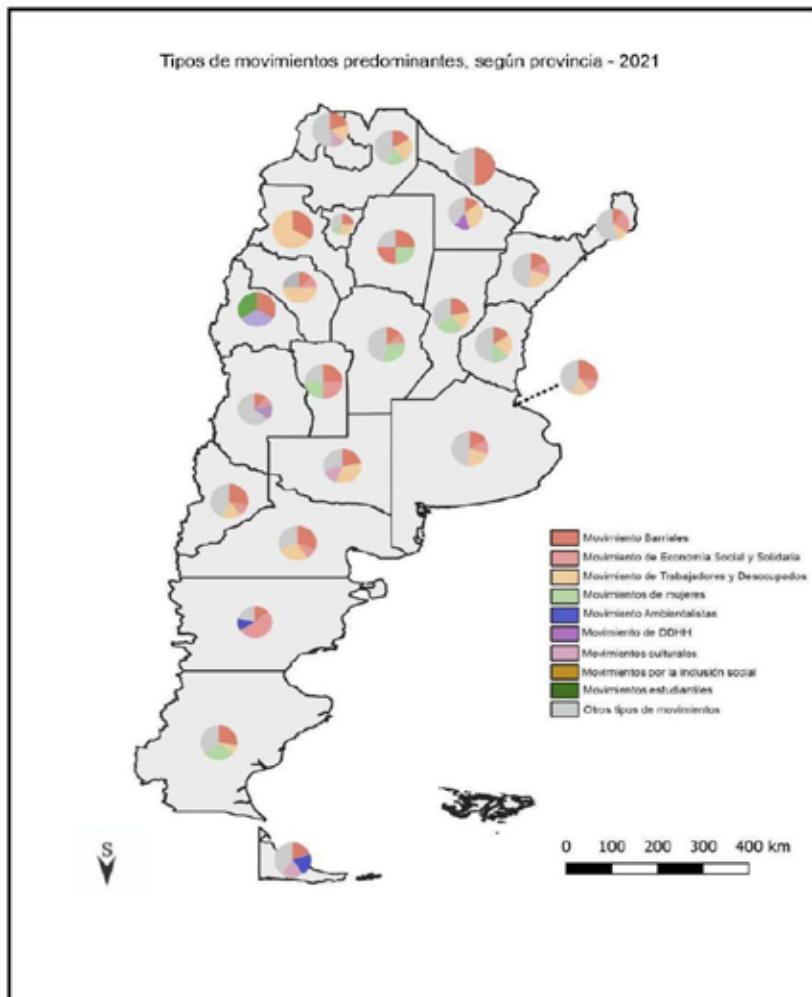
Más allá de esta tendencia general, existen diferencias si analizamos los tipos de movimientos que protagonizaron más acciones por provincia, como puede observarse en el mapa siguiente.

El mapa 6 muestra los tres principales tipos de movimiento que protagonizaron más acciones colectivas por provincia en 2021. Allí podemos observar que si bien el movimiento de trabajadores y desocupados constituye el que más acciones colectivas protagonizó a nivel nacional, su representación varía significativamente en las provincias.

En provincias como Tierra del Fuego y Chubut se destaca el movimiento ambientalista, donde se viene desarrollando una conflictividad vinculada a la expansión de ciertas actividades económicas extractivas que generan contaminación, deforestación y avance sobre espacios públicos.

Resulta interesante señalar que el movimiento de mujeres tiene una preeminencia importante a nivel nacional, destacándose en siete provincias: Santa Cruz, San Luis, Córdoba, Santa Fé, Santiago del Estero, Tucumán y Salta.

Mapa 6. Tipos de movimientos predominantes, según provincia - 2021



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

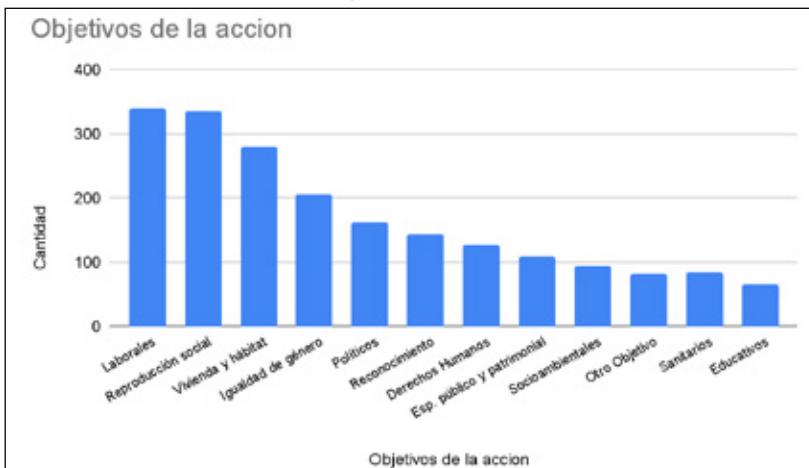
Objetivos de la acción

Tabla 4. Referencia de objetivos de las acciones colectivas según cantidad y porcentaje. Argentina (2021)

Objetivos de la acción	Cantidad	Porcentaje
Objetivos laborales	341	16,78
Objetivos por la reproducción social	336	16,54
Objetivos por la vivienda y hábitat	281	13,83
Objetivos por la igualdad de género	205	10,09
Objetivos políticos	162	7,97
Objetivos de reconocimiento	144	7,09
Objetivos por los Derechos Humanos	127	6,25
Objetivos por el espacio público y patrimonial	109	5,36
Objetivos socioambientales	94	4,63
Otro Objetivo	83	4,08
Objetivos sanitarios	84	4,13
Objetivos educativos	66	3,25
TOTAL	2032	100,00

Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Gráfico 5. Referencia de objetivos de las acciones colectivas según cantidad



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Como puede observarse (Tabla 4 y Gráfico 5), cerca del 50% del total de objetivos se encuentra comprendido por 3 categorías principales: objetivos laborales (16,7%), objetivos por la reproducción social (16,5%) y objetivos por la vivienda y el hábitat (13,8%). Asimismo, se alcanza el 65% si sumamos los objetivos por la igualdad de género (10%) y los objetivos políticos (7,9%).

También, podemos observar que los objetivos de reconocimiento y los objetivos por los derechos humanos se ubican entre el 7% y el 6%.

El resto de los objetivos mostrados en el gráfico, no supera el 6%.

Tipo de institución

Si bien en la mayor parte de las noticias no se informaba la intervención de alguna institución en la acción, en los casos en que fue posible determinarlo, los datos revelaron que, en la mayoría de las acciones, el Estado se encontraba involucrado, ya sea acompañando o siendo interpelado por las mismas. Otras instituciones mencionadas fueron los partidos políticos, las empresas, las ONG y las iglesias (Tabla 5 y 6, Gráfico 6 y 7).

Tabla 5. Total de referencias de los tipos de institución según cantidad y porcentaje. Argentina (2021)

Tipo de institución	Cantidad	Porcentaje
No Informa (NI)	647	43,72
Estado	584	39,46
Otra	87	5,88
Partido político	64	4,32
Empresa	49	3,31
ONG	30	2,03
Iglesia	19	1,28
TOTAL	1480	100,00

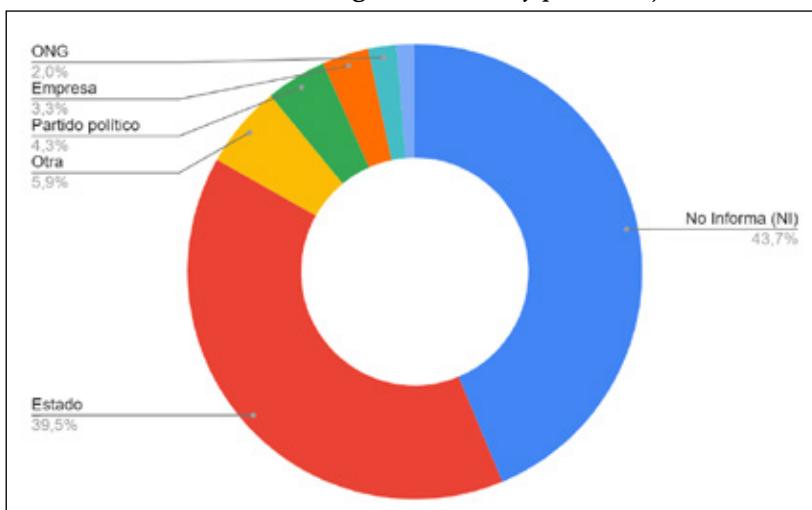
Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Tabla 6. Referencias de los tipos de institución (eliminando la categoría “no informa”) según cantidad y porcentaje. Argentina (2021)

Tipo de institución (sin NI)	Cantidad	Porcentaje
Estado	584	70,11
Otra	87	10,44
Partido político	64	7,68
Empresa	49	5,88
ONG	30	3,60
Iglesia	19	2,28
TOTAL	833	100,00

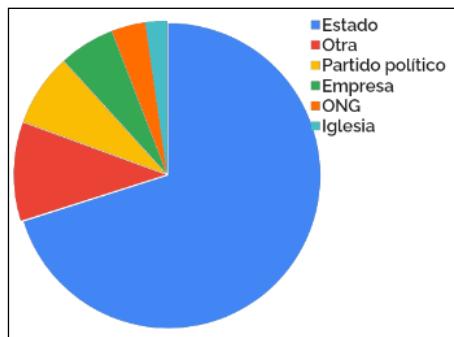
Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Gráfico 6. Total de referencias de los tipos de institución interviniente según cantidad y porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Gráfico 7. Referencias de los tipos de institución interviniente (eliminando la categoría “no informa”) según cantidad y porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Objetivos de desarrollo sostenible

Tabla 7. Referencia de los objetivos de desarrollo sostenible según cantidad y porcentaje. Argentina (2021)

ODS	Cantidad	Porcentaje
8-Trabajo decente y crecimiento económico	390	16,49
11-Ciudades y comunidades sostenibles	331	14
18-Otros objetivos	222	9,39
2-Hambre cero	217	9,18
5-Igualdad de género	210	8,88
1-Fin de la pobreza	202	8,54
10-Reducción de las desigualdades	200	8,46
16-Paz, justicia e instituciones sólidas	187	7,91
3-Salud y bienestar	130	5,5
4-Educación de calidad	59	2,49
15-Vida de ecosistemas terrestres	52	2,2
12-Producción y consumo responsables	48	2,03
13-Acción por el clima	33	1,4
6-Agua limpia y saneamiento	28	1,18
17-Alianças para lograr los objetivos	27	1,14
9-Industria, innovación e infraestructura	15	0,63
14-Vida submarina	9	0,38
7-Energía asequible y no contaminante	5	0,21
TOTAL	2365	100

Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Gráfico 8. Objetivos de Desarrollo Sostenible según cantidad de acciones



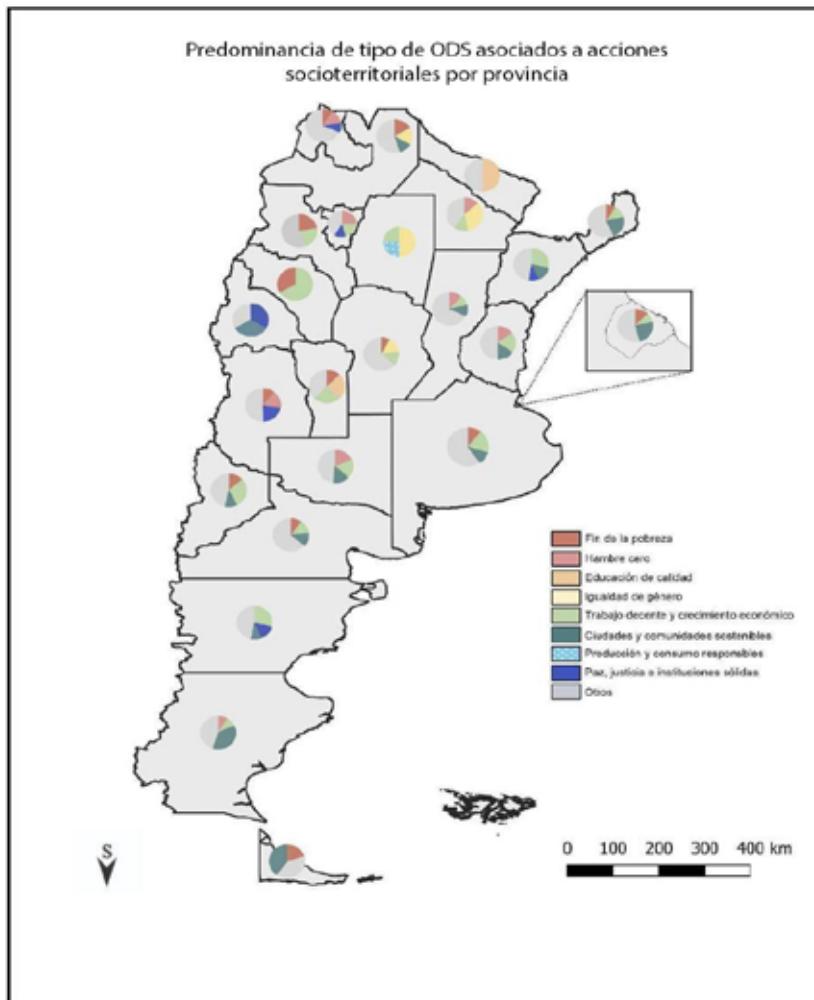
Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Como se observa (Tabla 7 y Gráfico 8), el 16,4% de las acciones colectivas relevadas corresponde al ODS 8 (Trabajo decente), el 14% al ODS 11 (Ciudades sostenibles) y el 9,1% al ODS 2 (Hambre cero).

Sin embargo, una cantidad considerable de acciones (9,3%) no pudo clasificarse según los indicadores principales de los 17 ODS. Por ello, generamos el ODS 18-Otros, que, a su vez, fue categorizado en 7 objetivos principales: Contención social de las personas en situación de calle, Objetivos contra la violencia institucional y la persecución política, Objetivos por la memoria y los DDHH, Objetivos por los derechos de la comunidad LGBTTQ+, Objetivos por los derechos de las comunidades originarias, Objetivos por la promoción de la cultura.

Por otra parte, en lo que respecta a la distribución geográfica de las acciones colectivas según el tipo de ODS con el que se relacionan, existió cierta diversidad regional, evidenciada en las diferencias entre los ODS predominantes en cada provincia (Mapa 6).

Mapa 7. Tipos de ODS y acción colectiva predominante, según provincia - 2021



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

El mapa 7 refleja la predominancia de ODS por cada provincia, en cada caso pueden observarse gráficos de torta en los que se jerarquizaron los tipos de ODS más recurrentes. Entre ellos se

destacan el ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y finalmente el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles).

A nivel nacional, podemos observar que los ODS más recurrentes son Trabajo decente y crecimiento económico y Fin de la pobreza. Esto se relaciona directamente con el mapa 5 de tipo de movimientos por provincia, donde sobresalieron los movimientos barriales y movimientos de desocupados.

Principales cruces de variables analizados

Luego de analizar las frecuencias de las variables relevadas en cada acción, nos parece necesario plantear algunas preguntas y posibles respuestas desplegando diversas reflexiones que los datos nos habilitan a realizar.

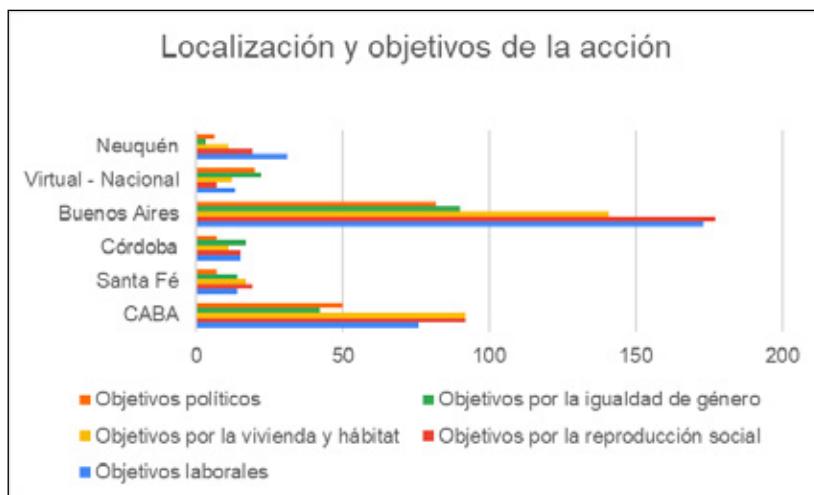
Una cuestión central en nuestra investigación es la distribución espacial a lo largo del país de las acciones colectivas protagonizadas por este gran conjunto de movimientos, lo cual nos invita a repensar la cartografía del conflicto urbano.

Al seleccionar las provincias donde se concentran la mayor cantidad de acciones pudimos comprobar que la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires son los dos distritos donde hay una clara preeminencia de acciones en términos absolutos; dato relacionado, claramente, con la concentración de población que las caracteriza. Sin embargo, si analizamos ese dato en términos relativos, es decir, si ponderamos la cantidad de acciones de acuerdo a la población de cada provincia, notamos que las provincias donde proporcionalmente existió un mayor caudal de acciones colectivas son: Jujuy, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Por un lado, la Ciudad de Buenos Aires, además de su propia conflictividad, mantiene su rol de centro político y sede principal del gobierno nacional, con lo cual es un lugar privilegiado para movilizaciones en torno a demandas vinculadas a políticas nacionales. Por

su parte, las provincias patagónicas, La Pampa y Jujuy vienen experimentando una creciente conflictividad generada por el desarrollo de la matriz minero-energética, del agronegocio y el turismo principalmente, y los efectos que eso tiene en términos de las condiciones laborales, de vida, de acceso a la tierra, etc.

Al analizar los principales objetivos de la acción en relación a la ubicación, observamos que, tal como desarrollamos en nuestra perspectiva teórica, los contextos y las escalas de acción explican algunos datos, como veremos a continuación.

Gráfico 9: Principales objetivos en relación a principales ubicaciones



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Por ejemplo, un dato significativo es que Neuquén es la única provincia donde los objetivos laborales (vinculados con el reconocimiento/defensa/reclamo por el derecho al trabajo) son la clara mayoría, mientras que en las otras provincias, si bien este objetivo es uno de los principales, generalmente es mayor la presencia de los objetivos por la reproducción social.

Por otra parte, las acciones registradas a escala nacional o virtual son mayoritariamente por objetivos de igualdad de género o por objetivos políticos (tales como manifestaciones a favor o en contra del gobierno, en repudio al acuerdo con el FMI o a la criminalización de la protesta, entre otros).

En relación con los objetivos por la igualdad de género cabe destacar también las diferencias de su peso en las provincias. Mientras que en Córdoba constituye el principal objetivo de las acciones y en Santa Fe tiene un peso equiparable a los objetivos laborales, en Neuquén tiene un peso minoritario. Esto abre una línea interesante para indagar acerca de esas diferencias y su explicación.

Otro aspecto a destacar es la relevancia que los objetivos de vivienda y hábitat tienen en algunas provincias en relación con otros objetivos. Por ejemplo en CABA estos objetivos tienen la misma relevancia que los objetivos relacionados con la reproducción social, mientras que en Santa Fe son el segundo objetivo más importante y en otras provincias ocupan el tercer lugar.

Gráfico 10: Tipos de acción y localización



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

En relación con el tipo de acción según localización, podemos observar que aquellas de carácter contencioso como cortes de ruta y bloqueos tienen un claro predominio en Neuquén y un peso significativo también en Buenos Aires. En general se puede observar que en todas las provincias seleccionadas predominan acciones que suponen un uso político del espacio público, tales como “Protestas y Manifestaciones” y “Movilizaciones y Marchas”.

Gráfico 11: Tipos de movimiento y localización



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

En relación con el tipo de movimiento y su localización geográfica, observamos que los movimientos de trabajadores y desocupados predominan en todas las provincias seleccionadas con excepción de Córdoba. También puede observarse proporcionalmente una mayor relevancia de los movimientos feministas en Córdoba y Santa Fe, donde estos movimientos ocupan el primer y segundo lugar respectivamente. Por su parte, los movimientos barriales ocupan el segundo lugar en importancia en Buenos Aires, CABA y Neuquén.

Si analizamos los objetivos en relación al tipo de acción desarrollada (Gráfico 12) vemos que el uso del espacio tiene un sentido importante para caracterizar las modalidades de acción colectiva.

Las acciones que buscan objetivos laborales apelan mayoritariamente a las protestas, manifestaciones y cortes y no tanto a las campañas o anuncios en medios. Se puede interpretar que la tradición de lucha sindical y de trabajadores organizados ha utilizado históricamente la calle o el lugar de trabajo como escenarios privilegiados para dar a conocer sus demandas y problemáticas. Los repertorios de protesta a los que apela el movimiento obrero si bien, por supuesto, se han ido modificando a lo largo del tiempo, podemos afirmar que han mantenido la acción directa y la ocupación de espacios (en sus diversas modalidades: manifestaciones, actos públicos, retención de tareas en los lugares de trabajo, asambleas, etc.) como sus características principales.

Paralelamente, las campañas son utilizadas preminentemente buscando objetivos ligados a la reproducción social. Esto obedece, sobre todo a las campañas realizadas para obtener alimentos, ropa, útiles escolares y diversos insumos para hacer frente a situaciones y problemáticas en las que se ponen en juego la atención de necesidades básicas de colectivos postergados (personas en situación de calle, niños y jóvenes de familias de bajos ingresos, instituciones públicas como salas de primeros auxilios y escuelas de barrios periféricos, etc.).

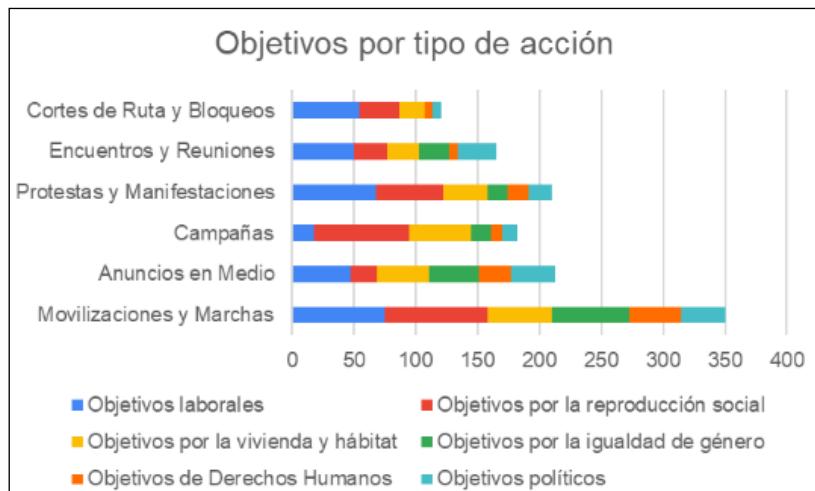
Asimismo, los anuncios en medios encuentran un alto porcentaje de objetivos por la igualdad de género, mediante comunicados, conferencias de prensa, entrevistas, etc.

Esto último también debe ser sopesado por el contexto del año del relevamiento que, como fue ya señalado, se trató de un año de transición de salida de la pandemia y, por lo tanto, con medidas precautorias para la circulación de grandes contingentes de personas. Esto, por lo tanto, explica la gran importancia que tuvieron las acciones de

protesta que utilizaron el espacio virtual para vehiculizar reivindicaciones y las acciones de tipo comunicativa (anuncios en medios). Sin embargo, el uso del espacio virtual como estrategia de protesta y movilización viene cobrando relevancia en todo el mundo. Los movimientos hacen uso de ese espacio no sólo para difundir sus luchas sino también como un instrumento que permite convocar y organizar movilizaciones en distintos lugares de manera simultánea, convirtiéndose en un medio fundamental para la política de escala. Incluso, su uso puede convertirse en un fin de protesta en sí mismo (por ejemplo, a través de un twittazo).

Por último, destacar que las movilizaciones y protestas se presentan como un repertorio clásico de acción, utilizado para una gran variedad de demandas y objetivos y que se vincula a una cultura política de apelación histórica a la lucha callejera en nuestro país.

Gráfico 12: Objetivos por tipo de acción



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

Finalmente, en cuanto a los objetivos según el tipo de movimiento, si bien este cruce muestra que en cada tipo de movimiento

prevalece el objetivo que lo nomina, no deja de ser un dato interesante la interrelación de las demandas, fundamentalmente los Movimientos de trabajadores y los Movimientos barriales.

Gráfico 13: Objetivos por tipo de movimiento



Fuente: Elaboración propia en base a análisis documental.

4. Resultados, hallazgos e interrogantes

Para finalizar, nos gustaría retomar algunos de los debates que fueron inaugurales de nuestra investigación sobre acciones colectivas de protesta urbana en Argentina. En primer lugar, la posibilidad de caracterizar a los movimientos socioterritoriales urbanos como aquellos que no sólo actúan en la ciudad sino que se proponen una transformación de o para la ciudad. De quedarnos con la primera formulación, consideramos que caeríamos en una manera de concebir el espacio en tanto marco o escenario de la acción (un colectivo trans que realiza una concentración en el centro de una ciudad, exigiendo que se cumpla el cupo trans en las reparticiones públicas se encuentra protagonizando una acción en la ciudad pero no por o para la ciudad). No queremos con esto decir que no existe un uso del espacio comprometido en la acción, aspecto que desarrollamos más adelante, pero sí que este acontecimiento no puede ser suficiente para considerar ese colectivo como parte de un movimiento socioterritorial urbano.

Para que esto último pueda sostenerse con fundamento, consideramos que la organización debe pertenecer a un movimiento que dispute las formas, alcances y sentidos de la ciudad que habita. De esta manera, de la tipología emergente en nuestra investigación, pueden identificarse el movimiento por la vivienda y el hábitat, el movimiento socioambiental y el movimiento por la defensa del patrimonio. Si bien en su interior encontramos organizaciones con

características muy diversas, podemos identificar una intencionalidad por afectar las normas habituales con las que la gestión de las ciudades pretende avanzar en una concepción de la vivienda entendida como bien de cambio, y el patrimonio y el ambiente sometidos a las fuerzas de la mercantilización e incluso a usos excluyentes o dañinos. Un ejemplo de disputa por la ciudad son las organizaciones de vecinos de distintos barrios de Buenos Aires que se movilizan en contra de la densificación tanto horizontal como vertical de construcciones, lo cual afecta, desde el punto de vista de los vecinos, la habitabilidad del barrio y su calidad de vida. Hemos relevado, asimismo, acciones de asambleas vecinales para defender el espacio público de balnearios costeros frente al florecimiento de emprendimientos de empresas de desarrollo turístico que avanzan en la privatización de dichos espacios. También podemos analizar algunos procesos de tomas de tierras o terrenos para resolver el acceso a la vivienda por parte de organizaciones que se hacen eco de la imposibilidad de resolver esta problemática mediante el mercado y a través de sus acciones denuncian la creciente exclusión de diversos sectores de nuestra sociedad del acceso pleno a la ciudad. En muchas ocasiones, la respuesta del Estado es el desalojo y la no resolución de estas problemáticas.

Otro eje importante que emerge de nuestra investigación es el análisis de las sedes elegidas por los diversos colectivos para desarrollar sus acciones, es decir, los lugares concretos donde ocurren las acciones, tales como ciertas plazas, calles, esquinas, monumentos, etc. Consideramos que representan indicadores de las estrategias de los movimientos en términos, no sólo de visibilización ante el resto de la sociedad de sus problemas, sino también de quiénes son los interlocutores a los que apelan con sus demandas, las disputas de poder simbólico que entran en juego, los lugares de la ciudad donde se manifiestan problemas concretos de habitabilidad, vivienda, entre otros. Tal como planteamos antes, las sedes de la acción no son

ingenuas sino que dicen mucho respecto de por qué se manifiestan en un lugar y no en otros. La preeminencia de la elección de desarrollar acciones en las diversas dependencias públicas, involucradas con la demanda en cuestión, da cuenta de la fuerte interlocución y apelación al Estado que sostienen los movimientos sociales y, por supuesto, el importante lugar del escenario público de la calle y las plazas para desarrollar el más habitual repertorio de acción que sigue siendo la movilización o manifestación callejera.

En relación con los métodos de protesta, la ocupación de espacios, sea protagonizada o no por una organización de un movimiento socioterritorial, así como ciertos usos del espacio público (marchas, bloqueos, manifestaciones) en tanto buscan su apropiación al menos momentánea, implican romper ordenamientos espacio-temporales de los usos designados para esos espacios y, en ocasiones, su refuncionalización. Esto otorga una fuerza importante a los movimientos para el logro de sus objetivos, de ahí que la criminalización de este tipo de prácticas esté en ascenso.

Por último, queda pendiente desarrollar estudios de tipo cualitativos en profundidad que nos permitan indagar sobre las redes espaciales que se ponen en juego para realizar saltos de escala en pos de potenciar los efectos y efectividad de las acciones y la problematización de demandas. Consideramos que, del análisis comparativo con los equipos de los otros países que se encuentran desarrollando la misma investigación, pueden ser identificadas organizaciones que articulan demandas y acciones en escalas supranacionales, permitiendo profundizar en el análisis de las resistencias a la desposesión y el extractivismo urbano. A su vez, se evidencia el contexto de pandemia por Covid-19 como un elemento común que agudizó problemáticas preexistentes e hizo emergir algunas demandas renovadas en materia de condiciones de vida y sostenibilidad del cuidado en las ciudades. En este sentido, la pandemia generó innovaciones en la

protesta (como por ejemplo, la multiplicación de acciones virtuales en redes), donde los movimientos organizaron acciones colectivas y redes de solidaridad para hacer frente a la crisis.

Lo que nuestro relevamiento sí nos permite decir es que la apelación a la articulación nacional, sobre todo en ciertos movimientos, como el de género, el de trabajadores y el de la economía popular y solidaria, ha sido determinante en ciertos escenarios de 2021 y, al avanzar en los relevamientos de los siguientes años, podremos indagar sobre sus dinámicas espaciotemporales. Asimismo, la construcción de la base de datos permitió identificar ciertas limitaciones en las fuentes periodísticas digitales, pero también su potencial para cartografiar protestas y conflictos invisibilizados. Como resultado de este análisis, uno de los hallazgos empíricos relevantes fue la visibilización de conflictos socioterritoriales en provincias como Neuquén y Jujuy, revelando cómo el extractivismo energético y minero genera nuevas geografías de resistencia. En consonancia, este libro es una invitación a repensar lo urbano como escenario de disputas civilizatorias que articulan luchas locales, regionales y globales.

Referencias bibliográficas

- Abal Medina, P., Natalucci, A. y Rosso, F. (2017). *¿Existe la clase obrera?* Le Monde diplomatique y Capital Intelectual.
- Acuña, C. (1993). Argentina. Hacia un nuevo modelo. *Nueva Sociedad*, 126, 11-24.
- Acuña, C. y Smith, W. (1996). La economía política del ajuste estructural: la lógica de apoyo y oposición a las reformas neoliberales. *Desarrollo Económico*, 36(141), 355-389.
- Auyero, J. (2001). *La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo*. Manantial.
- Barrancos, D. (30 de noviembre de 2020). La historia de los feminismos es la historia de la reivindicación de derechos. *Página 12*. <https://www.pagina12.com.ar/308851-dora-barrancos-la-historia-de-los-feminismos-es-la-historia>
- Borón, A. (1995). *Peronismo y menemismo: avatares del populismo en la Argentina*. El Cielo por Asalto.
- Castells, M. (1986). *La cuestión urbana*. Siglo XXI.
- CENDA. (2010). *La anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la encrucijada actual. La economía argentina en el período 2002-2010*. CENDA/Cara o Ceca.
- Clichevsky, N. (1975). *El mercado de tierras en el área de expansión de Buenos Aires y su incidencia sobre los sectores populares (1943-1973)*. CEUR-ITDT.
- Clichevsky, N., Prévot Schapira, M.F. y Schneier, G. (1990). *Loteos*

- populares, sector inmobiliario y gestión local en Buenos Aires. El caso del municipio de Moreno.* CEUR-CREDAL.
- Cravino, M.C. y Vommaro, P. (2018). Asentamientos en el sur de la periferia de Buenos Aires: orígenes, entramados organizativos y políticas de hábitat. *Población & Sociedad*, 25(2), 1-27.
- Cuanya, B. y Falú, A. (Comps.). (1997). *Reestructuración del Estado y política de vivienda en Argentina*. CEA-CBC.
- Cuanya, B. (2000). Cambios, logros y conflictos en la política de vivienda en Argentina hacia fines del siglo XX. *Seminario Internacional Gestión Local y Políticas Habitacionales*, 18 y 19 de noviembre de 2020, Rosario, Argentina.
- Delamata, G. (2002). De los “estallidos” provinciales a la generalización de las protestas en Argentina. *Nueva Sociedad*, 182, 121-138.
- Díaz Parra, I. y Candón Mena, J. (2014). Espacio geográfico y ciberespacio en el movimiento 15M Scripta Nova. *Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, 8(470).
- Dirección Nacional de Población (sf). *Población urbana en Argentina. Evolución y distribución espacial a partir de datos censales*. Registro Nacional de las personas, Ministerio del Interior. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/poblacion_urbana_dnp.pptx.pdf
- dos Santos, R. E. (2011). Tensionando a imaginação geográfica: dimensões espaciais dos movimentos sociais. En R.R. dos Santos, *Movimentos sociais e Geografia: sobre s(s) espacialidade(s) da ação social* (pp. 135-230). Ed. Consequência.
- dos Santos, R. (2011). *Movimentos sociais e Geografia: sobre s(s) espacialidade(s) da ação social*. Ed. Consequência.
- Fernández Wagner, R. (2008). *Democracia y ciudad. Procesos y políticas urbanas en las ciudades argentinas (1983-2008)*. UNGS.
- González Bombal, I. y Sonderegger, M. (1987). Derechos humanos y democracia. En Jelin, E. (Comp.), *Movimientos sociales y democracia emergente/1* (pp. 85-112). Centro Editor de América Latina.

- Grimson, A. (2009). Introducción. En A. Grimson, C. Ferraudi Curto y R. Segura (Comps.), *La vida política en los barrios populares de Buenos Aires* (pp. 11-38). Prometeo.
- Gualda, E. (2022). Social big data, sociología y ciencias sociales computacionales. *Empiria: Revista de metodología de Ciencias Sociales*, 53, 147-177.
- Gutman, P. (1988). *Desarrollo rural y medio ambiente en América Latina*. Centro Editor de América Latina.
- Halvorsen, S., Mançano Fernandes, B. y Torres, F. (2021). Movimentos socioterritoriais em perspectiva comparada. *Revista NERA*, 24(57), 24-53.
- Iturralde, M. E., Girado, A. y Lemiez, G. (2023). Reflexiones sobre la incorporación de fuentes documentales en un estudio de caso. *Revista Reflexiones*, 102(2).
- Jelin, E. (1985). Los movimientos sociales en la Argentina contemporánea: una introducción a su estudio. En Elizabeth Jelin (comp.), *Los nuevos movimientos sociales* (pp. 13-39). Centro Editor de América Latina.
- Katz, C. (2015). ¿Qué es el neo-desarrollismo?: Una visión crítica. *Anuario de Estudios Políticos Latinoamericanos*, 2, 49-74. Universidad Nacional de Colombia.
- Kessler, G. (Coord.). (2020). *Relevamiento sobre el impacto social del aislamiento dispuesto por el PEN*. Comisión COVID 19 Ciencias Sociales del MINCyT-CONICET-AGENCIA.
- Lefebvre, H. ([1968], 1978). *El derecho a la ciudad*. Ediciones Península.
- Lefebvre, H. (2013[1974]). *La producción del espacio*. Capitán Swing Libros.
- Leis, H. R. (1989). *El movimiento por los derechos humanos y la política argentina. Vol I y II*. Centro Editor de América Latina.
- Lopes de Souza, M. (2011). Autogestión, “autoplaneación”, autonomía: Actualidad y dificultades de las prácticas espaciales libertarias de los movimientos urbanos. En G. Calderón y E. León

- (Orgs.), *Descubriendo la espacialidad social desde América Latina: reflexiones desde la geografía sobre el campo, la ciudad y el medio ambiente* (pp. 53-90). Itaca.
- Lopes de Souza, M. (2013). Práticas espaciais. En M.L. de Souza, *Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial* (pp. 235-260). Bertrand.
- Lozano, C. y Raffo, T. (2011). *Actualización de la cobertura. Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH) y Asignación Universal por Embarazo para la Protección Social (AUE)*. Instituto Pensamiento y Políticas Públicas.
- Maldovan Bonelli, J., Fernández Mouján, O., Ynoub, E. y Moler, E. (2017). Los descamisados del siglo XXI: De la emergencia del sujeto trabajador de la economía popular a la organización gremial de la CTEP (2011-2017). *Cartografías del Sur*, 6, 41-64.
- Mançano Fernandes, B. (2005). Movimentos Socioterritoriais e Movimentos Socioespaciais: contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. *Revista NERA*, 6, 14- 34.
- Mançano Fernandes, B. y Sobreiro Filho, J. (2023). Teoria dos Movimentos Socioterritoriais e Socioespaciais. En E. Savério Sposito y G. dos Santos Claudino (Orgs.), *Teorias na geografia: mundos possíveis* (pp. 335-364). Consequência Editora.
- Melucci, A. (1999). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos.
- Merklen, D. (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Gorla.
- Merlinsky, G. (2008). La gramática de la acción colectiva ambiental en Argentina: reflexiones en torno al movimiento ciudadano ambiental de Gualeguaychú y su inscripción en el espacio público. *Temas y Debates*, 15, 35-60.
- Milligan, I. (2020). La historia en la era de la abundancia: archivos web e investigación histórica. *Historia y Memoria*, número especial, 235-269.

- Muzzopappa, E. y Villalta, C. (2011). Los documentos como campo. Reflexiones teórico- metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales. *Revista Colombiana de Antropología*, 2(47), 13-42.
- Natalucci, A. (2017). El sindicalismo peronista durante el kirchnerismo (2003-2015). En P. Abal Medina, A. Natalucci y F. Rosso, *¿Existe la clase obrera?* (pp. 63-124). Le Monde diplomatique y Capital Intelectual.
- O'Donnell, G. (1997). *Contrapuntos*. Paidós.
- Parra Saiani, P. (2016). Los gatekeepers y los recursos de la investigación. Viejos desafíos y nuevas perspectivas en el tiempo de los big data. *V Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales*, 16 al 18 de noviembre de 2016, Mendoza, Argentina.
- Porto-Gonçalves, C. W. (2001). *Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad*. Siglo XXI.
- Porto-Gonçalves, C. W. (2009). Chico Mendes, un ecosocialista. *Cultura y representaciones sociales*, 3(6), 188-194.
- Porto-Gonçalves, C. W. (2016) Lucha por la Tierra. Ruptura metabólica y reappropriación social de la naturaleza. *Polis. Revista Latinoamericana*, 45, 1-21.
- Recchini de Lattes, Z. (1973). *Aspectos demográficos de la urbanización en la Argentina, 1869-1960*. Editorial del Instituto.
- Relli Ugartamendía, M. (2018). *Política de regularización del hábitat popular urbano: provincia de Buenos Aires y partido de La Plata, 1983-2015* [Tesis de Doctorado]. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.
- Rijter, G., Ruiz, A., Calvo, R.; Urquiza, A. y Contreras Lisperguer, R. (Coords.). (2024). *Pobreza energética en la Argentina. Propuestas conceptuales y metodológicas para su diagnóstico*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

- Río, M. (2008). Usos y abusos de la prensa como fuente de datos sobre acciones colectivas. *EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, 16, 59-84.
- Rodríguez, M.C. (Coord.). (2021). *Hábitat, autogestión y horizonte socialista. Construyendo con y sin ladrillos la nueva sociedad*. El Colectivo.
- Rodríguez, M.C. y Zapata, M.C. (2020). Organizaciones sociales y autogestión del hábitat en contextos urbanos neoliberales. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, 67.
- Rofman, A. y Romero, L.A. (1997). *Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina*. Amorrortu.
- Romero, L. A. (2001). *Breve historia contemporánea de la Argentina 1916-2016*. Fondo de Cultura Económica.
- Rueda Ortiz, R. (2012), Ciberciudadanías, multitud y resistencias. En S. Lago Martínez (Comp.), *Ciberespacio y resistencias. Exploración en la cultura digital* (pp. 101-121). Hekht Libros.
- Schuster, F. (2003). Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva. En F. Schuster, F. Naishat, G., Nardacchione y Pereyra, S. (Comps.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea* (pp. 43-83). Prometeo Libros.
- Sobreiro Filho. J. (2016) Contribuição a construção de uma teoria geográfica sobre movimentos socioespaciais e contentious politics: produção do espaço, redes e lógica, racionalidade espaço-temporal no Brasil e Argentina. PhD Thesis, Universidade Estadual Paulista. Presidente Prudente, São Paulo, Brasil.
- Sonderéguer, M. (1985). Aparición con vida. (El movimiento de derechos humanos en Argentina). En E. Jelin (Comp.), *Los nuevos movimientos sociales* (pp. 7-32). Centro Editor de América Latina.
- Svampa, M. (2005). *La sociedad excluyente. Argentina bajo el peso neoliberal*. Taurus.

- Svampa, M. (2006). Movimientos sociales y nuevo escenario regional: Las inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina. *Sociohistórica*, 19-20, 141-155. <https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SHn19-20a06>
- Svampa, M. y Pereyra, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Biblos.
- Tejerina Montaña, B. (1991). Las teorías sociológicas del conflicto social. Algunas dimensiones analíticas a partir de K. Marx y G. Simmel. *Revista Reis*, 55, 45-63.
- Tobío, O. (2014). El doble carácter de la territorialidad de la experiencia piquetera en el norte de la Argentina: una conceptualización. *XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. El control del espacio y los espacios de control*, 5 al 10 de mayo de 2014, Barcelona, España.
- Torre, J. C. (1989). Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo. *Desarrollo Económico*, 28(112).
- Torres, F. V, Arzeno, M. B., Valente Ezcurra, D. y Relli Ugartamendía, M. (2025). Acciones colectivas de movimientos socioespaciales y socioterritoriales en áreas urbanas de Argentina. 2021. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (dataset). <http://hdl.handle.net/11336/257784>
- Tramontani Ramos, T. (2013). A dimensão espacial das lutas sociais: a experiência do Movimento dos Sem-Teto. *Revista Continentes*, 2, 96-123.
- Tramontani Ramos, T. (2019). A espacialidad dos conflictos sociais: as Jornadas de Junho de 2013. *Para Onde!?*, 11(1), 90-104.
- Veiga, R. (1985). *Las organizaciones de derechos humanos*. Centro Editor de América Latina.
- Wagner, L. (2010) *Problemas ambientales y conflicto social en Argentina. Movimientos socioambientales en Mendoza. La defensa del agua y el rechazo a la megaminería en los inicios del Siglo XXI* [Tesis de Doctorado]. Universidad Nacional de Quilmes.

- Wagner, L. (2021). Conflictos y movimientos socioambientales en Argentina. En E. Malta y A. Dichdji (Orgs.) *Protección a la naturaleza. Narrativas y discursos* (pp. 209-251). Teseo Press.
- Walter, M. (2008). Nuevos conflictos ambientales mineros en Argentina. El caso Esquel (2002-2003). *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*, 8, 15-28.
- Yujnovsky, O. (1984). *Claves políticas del problema habitacional argentino, 1955-1981*. Grupo Editor Latinoamericano.

Quienes escriben

Fernanda Torres

Es Licenciada en Sociología y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se desempeña como Investigadora Independiente de CONICET y es Profesora adjunta de Sociología Política en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE- UNLP). Sus temas de estudio e investigación se ubican en el campo de la sociología política y los estudios de movimientos sociales y socioterritoriales.

Agustín Alessio

Es Arquitecto y Magíster en Arquitectura y Hábitat Sustentable por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y doctorando en el Doctorado de Geografía (FaHCE-UNLP). Actualmente es Becario doctoral CONICET y Ayudante diplomado en Planificación territorial (FAU-UNLP). Sus temas de estudio e investigación están ligados a los procesos de tomas de tierras en contextos urbanos y las lógicas de intervención estatal en los mismos, particularmente en los casos vinculados a relocalizaciones.

Mariana Arzeno

Es Licenciada y Doctora en Geografía por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Trabaja como Docente de grado y posgrado (UBA). Integra el Grupo de Estudios Geografías Emergentes: políticas, conflicto y alternativas socioespaciales (IIGEO -UBA/ CO-

NICET). Es Investigadora Independiente de CONICET. Sus líneas de investigación se enmarcan en el campo de discusiones sobre geograficidad de las resistencias, conflictos y alternativas.

Maia Delgado Pintos

Es Licenciada y Profesora de Sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP), y Doctoranda en Ciencias Sociales (FaHCE-UNLP). Sus temas de investigación se ubican en el campo de los estudios sobre movimientos estudiantiles universitarios y juventudes militantes.

María Esnaola

Es Licenciada y Profesora de Sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP).

Pablo Fuentes

Es Licenciado en Sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP) y Doctorando en Geografía. Se desempeña como Becario Doctoral de CONICET. Sus temas de investigación giran en torno a las estrategias productivas estatales y empresariales para insertarse en la cadena de valor del litio y sus impactos socioterritoriales en Argentina.

Amanda Gómez Lewis

Es Licenciada en Sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP).

Rodrigo González Arcumano

Es Profesor en Sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata (FaHCE - UNLP).

Lautaro Lanusse

Es Profesor de Geografía por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. (FCH-UNICEN) y Doctorando en Geografía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP). Como Becario Doctoral (CONICET), trabaja en temas relacionados al acceso justo al hábitat de los sectores populares de Tandil, analizando la producción social del hábitat de los movimientos sociales urbanos de la ciudad.

Chiara Maestri

Es Licenciada y profesora de Sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP) y Doctoranda en Ciencias Sociales. Como Becaria Doctoral de CONICET, sus temas de investigación refieren a la desigualdad de género en su manifestación socioeconómica y la distribución vigente de las cargas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

Dante Marchissio

Es estudiante de la Licenciatura en Sociología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP).

Anastasia Mazars

Es estudiante de la Licenciatura y del Profesorado en Sociología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP). Se desempeña como Becaria EVC - CIN. Sus temas de investigación se ubican en el campo del movimiento sindical en articulación con los estudios de género.

Daiana Melón

Es Doctora en Ciencias Sociales, Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Maestra-

da en Gobierno por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Trabaja como Investigadora del Instituto de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar (IPAF), región pampeana del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Sus temas de investigación versan sobre extractivismo, infraestructura y agricultura familiar. Forma parte de IPAF Pampeana- INTA/ Grupo de investigación Al Borde.

Agustina Menéndez Lucero

Es estudiante de la Licenciatura en Sociología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP). Actualmente es Becaria EVC - CIN con el trabajo “Derecho a la ciudad, expansión urbana, y características de los barrios populares informales platenses en la última década”.

Manuel Peredo Torres

Es Profesor de Geografía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP).

Mariana Relli Ugartamendía

Es Doctora y Profesora de Geografía por la Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP), Magíster en Hábitat y Vivienda por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Formó parte del Grupo de Estudios Urbanos del CIG IdIHCS (FaHCE - UNLP - CONICET) hasta 2024. Desde 2025, es Profesora de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha trabajado sobre políticas habitacionales y de regularización del hábitat popular, procesos de producción social del hábitat y cooperativismo de vivienda.

Camila Trenco

Es Licenciada en Sociología y Doctoranda en Geografía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad

Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP). Trabaja en temas relacionados a urbanizaciones privadas en la costa atlántica bonaerense y sus configuraciones y efectos socio-territoriales. Actualmente está adscripta al taller “Organizaciones y Territorio. Reflexiones sobre el Derecho a la Ciudad” (FaHCE-UNLP).

Dana Valente Ezcurra

Es Profesora y Licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. (FCH-UNICEN), Magíster en Ciencias Sociales con mención en Problemas Políticos Latinoamericanos (FCH-UNICEN) y Doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP). Actualmente es Becaria Posdoctoral de CONICET y se desempeña como Ayudante Diplomada en Facultad de Ciencias Humanas (UNICEN).

Wilians Ventura Ferreira Souza

Es Licenciado y Magíster en Geografía, doctorando en Geografía en la Faculdade de Ciências e Tecnologia de la Universidade Estadual Paulista (FCT/UNESP) y miembro del Núcleo de Estudios, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária (NERA). También es Coordinador de la Red Brasileña de Investigaciones sobre las Luchas por Espacios y Territorios Urbanos (REDE DATALUTA - Espacio Urbano). Actualmente se desempeña como Becario de investigación de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Grupo de estudios sobre Movimientos Socioespaciales y Socioterritoriales Urbanos en Argentina (MSUA)

Este libro analiza las acciones colectivas urbanas en Argentina desde una perspectiva socioespacial y socioterritorial, entendiendo al espacio a partir de su vínculo con las relaciones sociales y de poder, como un campo de disputa material y simbólica. Partiendo de este enfoque, estudiamos las acciones de protesta protagonizadas por movimientos sociales en espacios urbanos, profundizando en sus estrategias. Distinguimos así entre movimientos socioespaciales y movimientos socioterritoriales que producen espacialidades y territorialidades alternativas a través de la apropiación contenciosa de espacios públicos, la construcción de redes multiescalares vinculando agendas de lucha y la configuración de identidades políticas arraigadas en experiencias de organización y resistencia territorial. Los hallazgos revelan la centralidad de las luchas urbanas, destacando su potencial para cuestionar modelos extractivistas de desarrollo y aportando herramientas conceptuales para analizar los conflictos sociales urbanos en Argentina.



97

ISBN 978-950-34-2635-7

